

# UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

## Escuela de Derecho



## EL PROCEDIMIENTO MONITORIO PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES SIN TÍTULO EJECUTIVO

Monografía previa a la obtención del  
Título de Abogado de los Tribunales  
de Justicia de la República y  
Licenciado en Ciencias Políticas y  
Sociales.

**Autor:** Miguel Ángel Centeno Pineda  
C.I. 0705698199

**Director:** Dr. Edgar Geovanni Sacasari Aucapiña  
C.I. 0102086618

Azuay - Cuenca

2017



## RESUMEN

El Código General de Procesos trae consigo un nuevo procedimiento a nuestro ordenamiento jurídico, estamos hablando del Procedimiento Monitorio, alternativa para el cobro de obligaciones de carácter dinerario con límite en la cuantía y que no conste en título ejecutivo, innovación en materia procesal porque permite el no patrocinio de abogado cuando la obligación no supere los tres salarios básicos unificados del trabajador en general con la sola presentación del formulario respectivo emitido por el Consejo de la Judicatura.

Este trabajo investigativo, se basará en el estudio y análisis del procedimiento monitorio en el Ecuador, estructura, características y efectos en los meses que lleva vigente, más un paralelo con otras legislaciones, fuentes doctrinarias y sus diferencias con el proceso ejecutivo.

A demás los beneficios que brinda al mundo del derecho a través de los principios básicos consagrados en nuestra Constitución de la República como los de economía, celeridad y eficacia procesal, donde se analizará si se vulnera el derecho a la legítima defensa, previendo el abuso del derecho y precautelar así un debido proceso legítimo, para evitar la nulidad e inseguridad jurídica en nuestro país.

**Palabras Claves:** PROCEDIMIENTO MONITORIO, OBLIGACIÓN DINERARIA, SISTEMA PROCESAL.



## ABSTRACT

The General Code of Processes brings with it a new procedure to our juridical arranging. We are speaking about the Admonitory Procedure. Alternative for the cashing of obligations of character dinerario with limit in the quantity and that does not consist in executive title. Innovation in procedural matter because it allows the lawyer's not patronage when the obligation does not overcome three unified basic wages of the worker in general with the alone presentation of the respective form expressed by the Council of the Judicature.

This one investigative work. It will be based on the study and analysis of the admonitory procedure in the Ecuador. Structure characteristics and effects in the months that current ride more a parallel with other legislations doctrinaire sources and its differences with the executive process.

To the others the benefits that it offers to the world of the right across the basic beginning dedicated in our Constitution of the Republic like those of economy speed and procedural efficacy. Where it will be analyzed if the right is damaged to the self-defense foreseeing the abuse of the right and to preprevent this way a due legitimate process to avoid the nullity and juridical insecurity in our country.

**Keys Words:** ADMONITORY PROCEDURE, MONEY OBLIGATION, PROCEDURAL SYSTEM.



## ÍNDICE

<b>RESUMEN.....</b>	<b>2</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>3</b>
<b>CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL .....</b>	<b>6</b>
<b>CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....</b>	<b>7</b>
<b>DEDICATORIA .....</b>	<b>8</b>
<b>AGRADECIMIENTOS .....</b>	<b>9</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>10</b>
<b>CAPÍTULO 1.....</b>	<b>13</b>
1.1    GENERALIDADES.....	13
1.2    DEFINICIONES .....	14
1.3    ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO .....	17
1.4    EL PROCEDIMIENTO MONITORIO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA ..	18
1.5    NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO.....	20
<b>CAPÍTULO 2.....</b>	<b>25</b>
2.1    ASPECTOS GENERALES.....	25
2.2    ELEMENTOS ESENCIALES EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO.....	26
2.2.1    La acción .....	26
2.2.1.1.    Elementos de la acción.....	28
2.2.2.    La jurisdicción.....	29
2.2.2.1.    Características de la jurisdicción.....	30
2.2.3.    El proceso.....	30
2.3    CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO .....	31
2.4    CASOS EN LOS QUE CABE EL PROCEDIMIENTO MONITORIO .....	40
2.5    LA DEMANDA EN EL PROCESO MONITORIO .....	49
2.5.1    Forma y requisitos .....	49
2.5.2    Funciones de la demanda .....	49
2.5.3    Requisitos procesales .....	49
2.5.4    Diligencias preparatorias.....	54
2.6    EFECTOS DE ADMISIÓN EN LA DEMANDA DE PAGO .....	55



2.6.1	La Citación .....	56
2.6.2	Formas de Citación.....	57
2.7	EFFECTOS INMEDIATOS DE LA OPOSICIÓN .....	59
2.8	LOS INTERESES A COBRAR EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO .....	63
2.8.1	Interés legal .....	64
2.8.2	Interés convencional.....	65
2.9	LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO .....	66
2.9.1	Clasificación de los medios probatorios.....	68
2.9.1.1	Pruebas documentales .....	69
2.9.1.2	Pruebas testimoniales .....	70
2.9.1.3	Pruebas periciales.....	74
2.9.1.4	La inspección judicial.....	76
2.10	LA RESOLUCIÓN JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO.....	78
2.10.1	Contenido de la sentencia.....	80
2.11	LA IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL .....	81
2.11.1	Principios rectores que regulan al derecho de impugnación .....	82
2.11.2	Clasificación de los medios impugnatorios.....	83
2.11.2.1	Medios de impugnación en la misma instancia.....	84
2.11.2.2	Medios de impugnación ante otra instancia .....	84
2.11.2.2.1	El recurso de apelación.....	85
2.11.2.2.2	Procedimiento para recurrir al fallo.....	85
2.11.2.2.3	El efecto del recurso de apelación .....	86
<b>CAPÍTULO 3.....</b>		<b>87</b>
3.1	ASPECTO GENERAL .....	87
3.2	PROCEDIMIENTO MONITORIO EN ESPAÑA.....	87
3.3	PROCEDIMIENTO MONITORIO EN COLOMBIA .....	89
3.4	COMPARACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO .....	92
3.4.1	Tabla 1.....	92
<b>Conclusiones .....</b>		<b>93</b>
<b>ANEXOS .....</b>		<b>95</b>
Anexo 1.-.....		95
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>		<b>97</b>

## CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL



Universidad de Cuenca

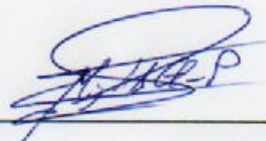
Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

---

**MIGUEL ANGEL CENTENO PINEDA**, en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación **"EL PROCEDIMIENTO MONITORIO PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES SIN TÍTULO EJECUTIVO"**, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, Octubre 2017



---

Miguel Ángel Centeno Pineda

C.I: 0705698199



## CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Universidad de Cuenca  
Cláusula de Propiedad Intelectual

---

MIGUEL ANGEL CENTENO PINEDA, autor/a del trabajo de titulación "EL PROCEDIMIENTO MONITORIO PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES SIN TÍTULO EJECUTIVO", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, Octubre 2017

---

Miguel Ángel Centeno Pineda

C.I: 0705698199



## DEDICATORIA

A Dios, por darme la fortaleza de nunca darme por vencido.

De forma muy especial a mis padres Ángel y Beatriz, apoyo incondicional en este proceso de formación académica.

A mi esposa, Viviana, que gracias a su empuje y coraje no hubiera podido cumplir mi sueño de ser un profesional.

Y de manera sublime a mi hijo, Miguel Santiago, que a más de tener mí afecto y cariño, tienes mi esfuerzo, dedicación y mis ganas de buscar lo mejor para ti.





## AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de Cuenca por darme la oportunidad de estudiar y ser un profesional.

A mi director de monografía, Dr. Geovanni Sacasari, por su ejemplo, dedicación y enseñanzas en las aulas de clases, logrando en mí un concepto de excelencia a la hora de estudiar y ejercer la profesión.

Un agradecimiento muy notorio a todos los profesionales del derecho en la Facultad de Jurisprudencia, quienes de manera directa o indirecta dejaron en mí una enseñanza profunda como docentes, colegas y amigos.

Son muchas las personas que formaron parte de mi vida como estudiante universitario, las que me gustaría agradecer su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los momentos más oscuros de mi carrera, sin importar en donde estén quiero darles las gracias de manera muy afectiva a todos ellos.



## INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, se implementa el sistema oral en todas sus instancias, fases y diligencias con sus excepciones, bajo los principios que están en nuestra Constitución de la República desde hace muchos años, como son los de inmediación, celeridad, lealtad y economía procesal, en los que se admite tendencias procesales actualizadas, con el fin de permitir agilidad y comodidad en el acceso de la ciudadanía al servicio de la justicia, avalando el tiempo razonable en la sustentación de los procesos y el contacto directo del juez con las partes procesales y las pruebas, para olvidarnos así del viejo sistema escrito, caracterizado por las dilaciones, incidentes, falta de intervención directa del juez, formulas y ritos innecesarios que atentaban a principios constitucionales y que se desmoronaba en el abandono por la falta del despacho oportuno.

El Código Orgánico General de Procesos, en su libro IV, recoge dos tipos de procesos, primero los de conocimiento, entre los cuales tenemos al procedimiento ordinario, el procedimiento contencioso tributario y contencioso administrativo, el procedimiento sumario y los procedimientos voluntarios. Y segundo los procesos ejecutivos, entre los que encontramos al viejo procedimiento ejecutivo y el nuevo procedimiento monitorio. Todos estos regulan la actividad procesal en todas las materias con excepción de la constitucional, electoral y penal, sin embargo sus normas tienen un carácter supletorio.

En este contexto, se introduce en nuestro país por primera vez el procedimiento monitorio, que busca solventar el sin número de obligaciones no documentadas en un título ejecutivo con límite en la cuantía, donde nuestro sistema de justicia no pudo solucionar este tipo de obligaciones de forma ágil y oportuna con los sistemas procesales antes consagrados. Así el procedimiento monitorio anhela solucionar de forma sumaria los conflictos que preceden a obligaciones que no estén constituidas en un título ejecutivo, por lo que el Estado se vio en la necesidad de implementar este nuevo procedimiento con características especiales, términos cortos y simplificados.

La presente monografía estará dedicada al análisis del procedimiento monitorio instaurado en el Ecuador, a través del COGEP, como herramienta para los estudiantes de

derecho y profesionales, que sirva para conocer las características, estructura y funcionamiento de dicho procedimiento, así como también, las causas sociales por las que el legislador se permitió debatir y aprobar en su momento.

Para iniciar el estudio del procedimiento monitorio, en una primera parte se realizará un acercamiento a los antecedentes históricos, importante aspecto que nos permitirá entender el contexto y alcance en el que se desarrolla la norma. Así como también y para buen entendimiento del lector, las diferentes definiciones que la doctrina nos regala y enseña para comprender de que la institución no es novedosa en otras legislaciones, pero si en el ámbito procesal ecuatoriano. Aquí radica la importancia de esta investigación, pues el procedimiento monitorio busca enseñar a la comunidad jurídica ecuatoriana los beneficios que ofrece este instrumento jurídico procesal, buscando solución a conflictos que se encuentran abismados una gran parte de acreedores y que desde hace muchos años no han tenido respuestas en nuestra justicia ecuatoriana.

En segundo plano y para desarrollar el estudio del procedimiento monitorio, se hará un análisis detallado y descriptivo de los elementos esenciales del procedimiento monitorio, y así poder resaltar las características jurídicas esenciales que debe contener.

Una vez descrita estas características, procederé a explicar su estructura establecida en los artículos 356, 357, 358, 359, 360 y 361 del COGEP, estableciendo su procedencia, es decir, los requisitos formales que deben cumplir los accionantes para dar inicio a la demanda y como bien lo establece el artículo 356 del mismo COGEP, señala:

La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio. (p.85)

Sin olvidar que también se procederá al análisis minucioso de cada artículo sobre este procedimiento, explicando todas las etapas del trámite que lo estructuran, como sus efectos inmediatos de admisión y oposición a la demanda, por lo que se adjuntará a este trabajo monográfico el formulario respectivo para solicitar la tutela judicial efectiva.

Como tercer aspecto, se realizará una comparación diferencial con el procedimiento ejecutivo, para que el lector identifique los rasgos característicos de cada trámite y no caiga en error al momento de presentar una demanda, esto nos permitirá identificar que



obligaciones no tienen origen en el procedimiento monitorio. A su vez, se derivará al estudio superficial de los procedimientos monitorios existentes en España y Colombia bajo un criterio de derecho comparado, para resaltar las características fundamentales que debe tener este tipo de procesos.

En esta monografía, se utilizará el método de investigación deductivo, técnica metodológica que permite ir de lo particular a lo general, debido que al no existir doctrina jurídica sobre el procedimiento monitorio en el Ecuador, hay que acudir a la legislación comprada con la finalidad de encontrar principios generales para aplicarlos a casos individuales, y así obtener material para abastecer esta investigación.

En resumen, esta investigación tiene como fin convertirse en una guía jurídica para los estudiantes y profesionales del derecho, para que su estudio se desarrolle con mayor sencillez, como sabemos, el procedimiento monitorio recién ha sido implementado en nuestro ordenamiento jurídico y que mejor que estar preparados para la práctica diaria en los diferentes juzgados del país.



## CAPÍTULO 1

### Aspectos generales del procedimiento monitorio

#### 1.1 GENERALIDADES.-

Lingüísticamente, monitorio viene del latín *monitorius* que significa avisar o amonestar, en este sentido, el proceso monitorio es aquel que sirve para avisar o poner en conocimiento del demandado su obligación de pagar una deuda dineraria, con indicación del demandante.

De manera más amplia, el procedimiento monitorio es aquel proceso especial, no contencioso, dotado de sumariedad por el cual el acreedor de una suma de dinero constante en un documento no ejecutivo, avisa o hace conocer a su deudor que dicha obligación es de plazo vencido, líquida y exigible, a fin de que proceda a su pago.

El procedimiento monitorio tiene por objeto el cobro de obligaciones dinerarias de cuantía restringida, que no consten en títulos ejecutivos, por lo que viene a ser un proceso breve y sumario, pero por razones cuantitativas y no cualitativas, a diferencia del proceso ejecutivo que en doctrina se considera sumario por razones cualitativas o de calidad del título ejecutivo, debe contener una obligación ejecutiva.

Según el artículo 356 del COGEP señala:

La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio. (p.85)

En otras palabras, para demandar en procedimiento monitorio no se requiere de un título ejecutivo que contenga una obligación ejecutiva como se exige en el juicio ejecutivo, sino más bien que la obligación sea ejecutiva más el título no.

Además, el procedimiento monitorio no es un proceso de conocimiento al ciento por ciento, tanto porque no está ubicado en el COGEP, sino porque busca una manifestación de voluntad que se inicia con el auto de pago condicionado, enviando al deudor a que cumpla con la obligación o realice oposición bajo prevención de transformar el derecho en hechos mediante el embargo y remate de sus bienes, a diferencia del proceso de



conocimiento que busca una declaración de voluntad, que transforme en sentencia los hechos en derecho.

En el análisis del Procedimiento Monitorio, doctrinarios como Calamandrei, considera que este proceso supone una inversión de la carga del contradictorio, o lo que es lo mismo, el anudar a la rebeldía del demandado la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión del autor.

El procedimiento monitorio está vigente en muchas legislaciones, que como bien expone García (2016) al citar el criterio del tratadista Liebman: Han sabido ver con sagacidad a *“un origen histórico común, a un problema práctico único: el de ofrecer a determinados créditos privilegiados, provistos de una prueba particularmente fuerte, el medio de llegar a la ejecución por un camino mucho más rápido que el juicio ordinario”*. Por lo que era necesario introducir este procedimiento en nuestro sistema procesal.

Esta innovación satisface el derecho del acreedor que no podían demandar créditos por la falta de un título ejecutivo o por la relación de costo-beneficio que genera un juicio frente al resultado final. Por eso el proceso monitorio permite resolver casos de manera rápida y eficaz, sin una larga tramitación judicial.

Como ha podido abordarse hasta el momento, el procedimiento monitorio constituye una herramienta innovadora en nuestro sistema procesal, con esto se fortalece y se da solución jurídica en el derecho privado a obligaciones dinerarias que no constan en un título ejecutivo, por ejemplo, puede ser una factura o un documento creado por el mismo acreedor pero que justifique de forma legítima el origen de la obligación que se pretende reclamar.

## **1.2 DEFINICIONES.-**

Con el objetivo de obtener una mejor comprensión de la temática, es fundamental presentar al lector las diferentes definiciones que la doctrina nos trae sobre el procedimiento monitorio y que mediante el avance de este trabajo monográfico se irá profundizando.

Según el autor Couture, (1993), citado por Carteu (2016), define al procedimiento monitorio como:



Es aquel que, como el de desalojo, no comienza con demanda en sentido formal, sino con intimación o interpelación al demandado para que se realice determinada cosa u oponga las objeciones que contra tal mandato tenga, bajo apercibimiento de que en caso de no proceder de tal manera se dictara sentencia en su contra. (p.1160)

En este sentido, el procedimiento monitorio sería aquel procedimiento lacónico, ágil y eficaz en donde el juez dicta un auto de pago inmediato por el simple hecho de cumplir con los exigencias formales y legales al momento de presentar la demanda, es decir, el actor, una vez que demuestra legítimamente el crédito de su pretensión, la ley tutela su derecho y presume que en verdad el demandado no cumplió su obligación en el tiempo establecido.

Para Calamandrei (1946), citado así mismo por Carteau (2016), indica que el procedimiento monitorio es:

Simple petición escrita u oral del acreedor, el juez competente libra sin oír al deudor, una orden condicionada de pago dirigida al mismo deudor, con advertencia que el mismo puede hacer oposición dentro del término de 15 días a contar de la notificación. Si el deudor no hace oposición dentro de ese término la orden pago adquiere fuerza de título ejecutivo contra el cual no está admitido otro remedio que la restitutio in integram cuando el deudor pruebe no haber podido hacer oposición dentro del término a causa de un suceso imprevisto o inevitable. Si el deudor hace oposición dentro del término la orden de pago pierde, por el solo efecto de tal declaración, toda su fuerza el actor que ha visto cercenada su posibilidad de obtener un título ejecutivo, o puede usar su primitiva demanda para continuar su proceso o debe iniciar una nueva acción. (p.1160)

Pues bien, aquí nos damos cuenta que el procedimiento monitorio tiene un efecto trascendental al momento de presentar la demanda, como ya lo hemos venido mencionando, Calamandrei explica más ampliamente lo que sucede al momento de solicitar al juez tutela por el derecho de crédito a favor del acreedor, y explica manifestando que, el juez acepta la petición del actor sin antes escuchar al deudor, y le da un término necesario para que cumpla con la obligación o se oponga presentando su justificación formal. Ante esta situación, si el deudor no se opone a la pretensión del sujeto activo, aparece una figura muy antigua de origen romano, la restitutio in integram, que significa la restitución por completo de lo que solicita el acreedor. Este aforismo jurídico, era utilizado por el Pretor en la antigua Roma para dejar sin efecto un acto o negocio



jurídico y no hacia otra cosa que restablecer la situación jurídica preexistente, es decir regresaban las cosas al estado anterior.

A su vez, el Dr. Correa Delcasso (1998), resalta una definición apropiada del procedimiento monitorio y dice: *“Proceso especial plenario rápido que tiende, mediante la inversión de la iniciativa del contradictorio, a la rápida creación de un título ejecutivo con efectos de cosa juzgada en aquellos casos que determina la ley”*. (p.272)

Esta definición permite realizar una breve comparación con el derecho español, donde la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula al procedimiento monitorio, trae consigo una característica esencial, crea un título ejecutivo para proceder a la respectiva reclamación, muy diferente a lo que ocurre en nuestro país, donde aquí se crea no un título ejecutivo, sino uno de ejecución, tema que será abordado en los capítulos de comparación con otras legislaciones. Por consiguiente, y de la definición dada por el Dr. Correa Delcasso, señala ciertas características del procedimiento monitorio.

- a) **Proceso especial**, por su estructura procedimental se vuelve diferente a los que se venían desarrollando en nuestro sistema judicial, ya en el momento de presentar la demanda con el respectivo auto de pago y al momento de la traba de la litis.
- b) **Proceso plenario rápido**, porque cuando el deudor no formula excepciones en el plazo correspondiente, es decir, no se contraponen al auto de pago, el proceso finaliza y produce el efecto de cosa juzgada.
- c) **Eventual**, porque se busca que exista contradicción en el proceso, y esto está bien, porque se respeta principios básicos del debido proceso y que Calamandrei citado por Correa Delcasso (1998) lo supo analizar, diciendo que *“la finalidad de llegar con celeridad a la creación de un título ejecutivo se alcanza desplazando la iniciativa del contradictorio del actor al demandado”*. (p.273) En este sentido, si el deudor no propone excepción alguna, se entendería como aquel viejo refrán, “el que calla otorga”.





### 1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO.-

Históricamente el origen de esta herramienta procesal, apunta a las ciudades italianas en plena edad media, siglo XIII, que por sus actividades comerciales e innumerables transacciones que realizaban los mercaderes italianos, vieron la necesidad de regular un proceso rápido y dinámico, diferente a los procesos ordinarios de la época volviéndose ineficaz para el reclamo de deudas de ínfima cuantía, naciendo así los procedimientos sumarios, cambiarios y ejecutivos.

Como lo manifiesta Chiovenda, citado por Felipe Valcarcel Prieto (2014):

El genio italiano, que en la observancia de las formas no había alcanzado las exageraciones de otros pueblos, cuando las necesidades de la civilización que renacían resultaron mezquinas y estrechas las formas del proceso longobardo, enlazó a la vida presente la tradición romana, y con la exposición doctrinal del proceso justiniano, con su aceptación no servil en las legislaciones municipales, templada por aquellos residuos del pasado que se habían encarnado en la vida nuestra y por la expresión de necesidades nuevas, preparó al mundo la nueva ciencia procesal. (p.25)

Ante esta opinión doctrinal, diremos que el verdadero origen del proceso monitorio y base actual en el sistema europeo, es gracias a la figura del *mandatum de solvendo cum clausula iustificativa*, donde el acreedor ya no tiene que demostrar los hechos constitutivos de su pretensión, pero el deudor implícitamente tiene que acudir ante el juez para defenderse o en otras palabras, establecer excepciones que estime pertinentes.

En definitiva, al sujeto activo solo le corresponde solicitar al órgano de justicia la orden de pago, y una vez que el deudor ha sido legalmente notificado, solo tiene tres opciones:

- 1) Pagar la deuda, donde terminaría el proceso.
- 2) Comparecer al llamado del juez, estableciéndose la traba de la litis.
- 3) No comparecer a juicio o guardar silencio, donde tácitamente acepta la pretensión del acreedor.

Por esa razón, se dice que el *mandatum de solvendo cum clausula iustificativa*, permitía la rápida obtención de un título ejecutivo por parte del sujeto activo, que en un inicio no contaba con ninguna prueba documental, todo esto para superar siempre el tedioso *solemnis ordo iudicarius* de aquel entonces, innovación para la administración de justicia



de la época, que con sus características sumarias permitían ser eficaces en las resoluciones.

En nuestra América, el proceso monitorio llega gracias al Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica de 1988, adoptado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, designándolo como un proceso de estructura monitoria, dentro de la clasificación de los procesos de conocimiento. Para un mejor entendimiento, es necesario recordar los motivos que dieron paso a su nacimiento.

El proceso monitorio adoptado en el Anteproyecto de Código Modelo para Iberoamérica sí constituye una novedad y resulta polémico, por lo cual nos permitiremos hacer una breve referencia al mismo.

El país pionero en regular el procedimiento monitorio en Latinoamérica fue Uruguay, que se basó en el Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, gracias al ilustre catedrático Enrique Véscoli.

La finalidad del proceso monitorio en Uruguay, es similar al criterio del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, donde no solo se permite crear un título ejecutivo, si no también sirve para otros casos como son, la entrega de la cosa, entrega efectiva de la herencia, pacto comisorio, escriturización forzada, resolución de contrato de promesa, separación de cuerpos y divorcio, y cesación de condominio de origen contractual.

#### **1.4 EL PROCEDIMIENTO MONITORIO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.-**

Previo al análisis del Procedimiento Monitorio en Ecuador, es importante hacer mención lo expresado en el Congreso Internacional de Derecho Procesal COGEP, que citando al doctrinario Chiovenda (1989) explica: *“La estructura monitoria se remonta a los mandamientos de pago que ya existían en la Europa medioeval y que evolucionaron en el mandatum de solvendo cum clausula iustificativa del proceso italiano (...) (p.07)*

En correspondencia a lo expresado anteriormente, la Revista Judicial ecuatoriana a través del Dr. José Cornejo Aguilar expone en su editorial del 12 julio, 2016 lo siguiente:

Lo que lleva a pensar que desde el período medioeval, este se utilizaba para el cobro de ciertos créditos, aunque no resultasen de documentos, y que incluso se estableció el uso de no citar en juicio al deudor, sino de obtener directamente del juez la orden de la prestación



que abría la ejecución; es decir el mandatum o praeceptum de solvendo pero acompañado y justificado por la denominada clausula iustificativa, esto es, la indicación de que la orden se volvía plenamente ejecutable salvo que el deudor quisiese hacer valer excepciones; de tal manera que, a diferencia de procesos como los ejecutivos documentales, la defensa del deudor lograba el efecto de detener o enervar la ejecución mientras se resolviera el proceso. (p.C1:C3)

Es decir, y como se viene tratando en este trabajo monográfico, el procedimiento monitorio es de origen muy antiguo, cuya finalidad esencial es ejecutar el cobro de obligaciones dinerarias que no se encuentren documentadas en ningún título ejecutivo, por esa razón, nuestro país ahora cuenta con el Procedimiento Monitorio, para brindar tutela efectiva y seguridad jurídica a ciertos acreedores que no podían ejercer su derecho de crédito.

El Procedimiento Monitorio viene a nuestro ordenamiento jurídico con el afán de luchar contra el incumplimiento de ciertos deudores en diferentes transacciones comerciales. Por esa razón, nuestras autoridades prevén la posibilidad de accionar este tipo de herramienta procesal a través de un formulario práctico y que lo podemos descargar en el sitio web del Consejo de la Judicatura, facilitando el ingreso a la administración de justicia con una ventaja para los pequeños empresarios, que no necesitan el patrocinio del profesional en derecho cuando la pretensión no exceda de tres salarios básicos unificados.

Es de gran ventaja la incorporación de este procedimiento en nuestra legislación, pues se vuelve muy útil para cobrar dinero. En nuestro país, el procedimiento monitorio está regulado de tal manera, que el acreedor para que tenga éxito en su demanda, puede probar mediante facturas o cualquier tipo de documento sin importar su forma, y que conste la firma, sello, o cualquier señal física o electrónica proveniente del deudor, como un mensaje de texto por cualquier red social, situación que la ley presume inmediatamente incumplimiento por parte del deudor.

Es así que en el capítulo II del título IV del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se encuentran los artículos 356, 357, 358, 359, 360 y 361, que son los que regulan al procedimiento monitorio e indican como procede la acción monitoria, es decir, la deuda que se pretende debe ser de dinero, y la obligación liquida, exigible, y de plazo



vencido, además cuales son las formas de probar dicha deuda, los efectos de la oposición y los diferentes medios impugnatorios.

También el COGEP, desarrolla las formas de iniciar el procedimiento monitorio, lo que permite acudir a la administración de justicia mediante una demanda con todos los requisitos determinados en el artículo 142 del mismo cuerpo legal o con el formulario expedido por el Consejo de la Judicatura, esto dependerá de la cuantía a reclamar.

En manera de resumen, podemos decir que el procedimiento monitorio sirve para cobrar ciertas deudas dinerarias que no consten en título ejecutivo. El juez por su parte emitirá auto interlocutorio para proceder con la citación al deudor, y hacerle conocer sus obligaciones de pagar o proponer excepciones, es decir, se puede oponer ante tal pretensión, ya que si no se opone, se ejecuta el auto de pago.

Más adelante, se irá desarrollando cada artículo para su análisis, ya que lo que se pretende dejar al lector, es una sinopsis de lo que es el procedimiento monitorio en el Ecuador y no confundir con el proceso ejecutivo, que como se sabe, también al iniciar una demanda en trámite ejecutivo, el juez emite orden de pago para que el deudor cancele la deuda o deduzca excepciones.

Para terminar este capítulo, es importante citar las normas constitucionales que sirven de base para el desarrollo legítimo del procedimiento monitorio en el Ecuador, como son los artículos 75, 82, 84, 168, 172 de la Constitución de la República, esto edifica la estructura del procedimiento monitorio y que se abordará a continuación.

### **1.5 NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO.-**

El maestro Guillermo Cabanellas (2011), en su obra, Diccionario Jurídico Elemental, establece una definición de naturaleza jurídica, e indica:

Calificación que corresponde a las relaciones o instituciones jurídicas conforme a los conceptos utilizados por determinado sistema normativo. Así por ejemplo, la naturaleza jurídica de la sociedad será la de un contrato plurilateral, desde la perspectiva de su constitución, y la de una persona jurídica, desde el ángulo de su existencia como organización. (p.253)

Con este preámbulo, podemos empezar analizar la naturaleza jurídica del procedimiento monitorio, y que varía mucho en comparación a otras legislaciones, ya que doctrinarios



como Calamandrei lo considera un proceso ejecutivo muy diferente a lo regulado en nuestro ordenamiento jurídico, situación que no es aceptable y que será analizada en este capítulo, ya que se lo ha ubicado impropiamente en el COGEP dentro de los procedimientos ejecutivos, pues sus características propias, no persiguen ni siquiera un título ejecutivo sino de acuerdo al artículo 358, un título de ejecución.

Artículo 358 COGEP: *“Admisión de la demanda de pago.- La o el juzgador, una vez que declare admisible la demanda, concederá el término de quince días para el pago y mandará que se cite a la o al deudor”*. (p.86)

Es decir, el objeto del proceso monitorio es el cobro de obligaciones ejecutivas dinerarias de cuantía restringida que no consten en títulos ejecutivos, por eso es un proceso breve y sumario. Ante este particular recurrimos a la Teoría General del Proceso para poder establecer con exactitud su naturaleza jurídica, quien clasifica a los procesos desde diferentes puntos de vista:

1. **Heterocomposición.-** Es la intervención de un tercero para que solucione la pugna de intereses. Como lo menciona Azula Camacho (2008): *“La heterocomposición implica la intervención de un tercero, ajeno a los sujetos, entre quienes se suscita el conflicto, función que se atribuye al Estado y realiza por conducto de la rama judicial mediante la sentencia, previo el respectivo proceso”*(p.30). Aquí existen diferentes formas de solucionar los conflictos de las partes procesales, mediante la conciliación que la promoverá el juez en la audiencia preliminar o fase conciliatoria, acuerdo al que llegan las partes y que pone fin al conflicto. El arbitraje, que través de un procedimiento preestablecido y con el consentimiento del árbitro que es el tercero, dicta el famoso laudo arbitral. Por último, tenemos a la mediación, tercero que intenta que las partes lleguen a un acuerdo a meno para evitar un juicio largo y tedioso.

Desde esta perspectiva, el procedimiento monitorio es una forma heterocompositiva de solucionar un conflicto de intereses, porque el juez reconoce un derecho al acreedor, cuando este no tenga un título ejecutivo para hacer efectiva una obligación de carácter dinerario.

2. **Respecto a la Jurisdicción del Proceso.-** Se divide en contencioso y voluntario.

**2.1 Contencioso:** Es el choque de intereses sometida a la resolución de los jueces, cuyas características son:

- La función del juez es indelegable.
- Dualidad de las partes, es decir, existencia plena del demandante y demandado.
- Traba de la litis, donde da lugar a la acción y excepción.
- Se pone fin al conflicto mediante sentencia, que una vez ejecutoriada produce efecto de cosa juzgada material.

**2.2 Voluntario:** En este proceso no existe pugna de intereses o enfrentamiento entre quienes intervienen, es un proceso sin litigio. Si bien se actúa en un proceso, según la doctrina no se promueve contienda legal alguna entre las partes y el juez solo cumple funciones de simple administración. Sus características son:

- Es delegable, porque al imponer al juez actividades de simple administración, la ley faculta ahora a los notarios ciertas competencias que tenían los jueces.
- No existe contienda legal alguna, por lo que no existen partes y menos conflicto.
- No existen sentencia porque no hay un derecho en litigio, sino, una resolución con carácter de auto definitivo.

Con esta especificación, el procedimiento monitorio es un procedimiento híbrido, porque según el COGEP, existen dos circunstancias: si el deudor no se opone a la demanda y cumple con la obligación dineraria, por su propia naturaleza sería un proceso de jurisdicción voluntaria, porque existe el auto interlocutorio interpuesto por el juez que ordena el cumplimiento de pago dentro de quince días terminando así con el proceso. Entonces, no existen dos partes que tengan intereses contrapuestos, ni mucho menos hubo una contienda legal, ya que el auto interlocutorio busca la ejecución de la pretensión.

Pero en la segunda fase del procedimiento monitorio, no hay duda de que es un proceso de jurisdicción contenciosa, ya que si el demandado se opone a la demanda, el juez convocará a una audiencia única para solucionar los intereses contrapuestos a través de sentencia definitiva.

**3. De conformidad al carácter de la pretensión:** Pueden ser procesos de cognición, ejecución y de aseguramiento.

**3.1 Procesos de cognición o conocimiento:** Es el que busca del juez una declaración de voluntad sobre una pretensión discutida, lo que hace necesario un juzgamiento contradictorio, con actuaciones probatorias a fin de transformar los hechos en derecho y dar la razón al contendiente que efectivamente la tenga. Este tipo de procesos se subdividen a su vez en:

- **Declarativos:** Los que por medio de la sentencia comprueban una situación jurídica o un derecho preexistente, a fin de terminar con un estado de incertidumbre que afecta un derecho subjetivo, y que pueden ser positivos, como los de tercería excluyente; y negativos como los orientados a que se declare que no exista servidumbre de tránsito.
- **Constitutivos:** A través de la sentencia crean, modifican o extinguen un estado jurídico o un derecho, por ejemplo, la nulidad de un contrato.
- **Condena:** Persiguen una sentencia que imponga el dar, hacer o no hacer algo. Por ejemplo, pagar una suma de dinero o ejecutar una obra.

**3.2 Procesos de ejecución:** Son aquellos que se busca no una sentencia o declaración de un derecho, sino una manifestación de voluntad, esto es, la actuación del órgano judicial encaminada a la efectivización, materialización o cumplimiento de un acto, en miras a que se haga efectivo el derecho ya declarado, transformando los derechos en hechos. Ejemplo, sentencia dictada en el extranjero.

**3.3 Procesos de aseguramiento:** También llamados procesos cautelares, conocido en el COGEP como providencias preventivas, que buscan precautelar un bien sobre el cual se va a litigar o se litiga. En síntesis, se pretende una medida anticipada o preventiva que brinde seguridad jurídica respecto a la eficacia de la sentencia que a futuro se dicte.

Con este análisis, el procedimiento monitorio sería un proceso cognitivo de condena, cuando el deudor se oponga a la demanda, y de ejecución cuando no haya oposición de parte, lo que conduce a tenerlo como un proceso especial.

**4. Según el derecho que pretende proteger.-** Los bienes se pueden clasificar en derechos reales y personales:

**4.1 Reales:** Son las potestades que se establecen a favor de una persona determinada sobre un bien o grupo de bienes. Se da una relación directa entre

la persona titular del derecho y el bien objeto del derecho; y, las demás personas están obligadas de reconocer y respetar ese derecho. Pertenecen a este grupo los derechos de dominio, de herencia, usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activa, prenda e hipoteca.

**4.2 Personales:** También llamados de crédito, implican una prerrogativa que tiene una persona para exigir de otra una determinada pretensión. En esta relación intervienen tres elementos:

**4.2.1 El titular del derecho:** Sujeto activo de la relación o acreedor, que es aquel que tiene la facultad para exigir la prestación, es en definitiva, la persona en cuyo favor se ha constituido un derecho personal.

**4.2.2 La persona obligada:** Sujeto pasivo o deudor, que está en la necesidad jurídica de cumplir la prestación a favor del acreedor.

**4.2.3 El objeto de la relación o cosa debida:** Que será la prestación que el acreedor pueda exigir y consecuentemente la obligación que el deudor debe cumplir.

Los derechos personales o créditos, tiene como origen las fuentes de las obligaciones; que son precisamente, la ley, los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, todo lo cual está comprimido en la definición legal de derecho personal a la que hemos hecho alusión, cuando hace referencia a que los créditos son la contrapartida de las obligaciones contraídas por un hecho del obligado o la sola disposición de la ley.

En definitiva, el procedimiento monitorio protege a los derechos personales con una característica importante, que está limitado a las obligaciones dinerarias líquidas, exigibles y de plazo vencido.

Con estas perspectivas, la naturaleza jurídica del procedimiento monitorio varía según el ordenamiento jurídico de cada territorio, doctrinarios como Calamandrei lo consideran como un proceso ejecutivo. La legislación española considera en cambio al procedimiento monitorio como un proceso declarativo, por esa situación, es imprescindible establecer una crítica al legislador ecuatoriano, que la ubicado erróneamente en el COGEP dentro de los procedimientos ejecutivos, pues sus características especiales apuntan a un título de ejecución y no a crear un título ejecutivo.





## CAPÍTULO 2

### El derecho procesal como ciencia

#### 2.1 ASPECTOS GENERALES.-

En todo Estado de derecho impera un ordenamiento jurídico único, coherente y completo, guiado por el principio de jerarquía constitucional, compuesto por varios sistemas de leyes que deben mantener entre si una clara armonía y correspondencia en miras a brindar seguridad jurídica y fortalecer el Estado constitucional de derechos.

Según el artículo 133 de la Constitución de la República, las leyes son orgánicas y ordinarias, entre estas coexisten unas de derecho sustantivo o material, encargadas de señalar los derechos y obligaciones de las personas regulando las relaciones jurídicas sustantivas entre los ciudadanos. Y otras adjetivas o procesales, que dan vida y eficacia complementaria a las primeras, resolviendo los conflictos sociales que se presenten, restableciendo el orden jurídico alterado por el conflicto; en síntesis regulan las relaciones jurídicas adjetivas o procesales. Por esta razón, nuestro estudio de los elementos esenciales del procedimiento monitorio se enfoca en la ley adjetiva o procesal, determinado en el Código Orgánico General de Procesos.

El artículo 169 de la Constitución de la Republica, proclama: *“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia (...)”*. Entendemos que sistema es el conjunto armónico de normas y principios, estos deben mantener su relevancia jurídica en el campo de los procedimientos particularmente civiles, pues deben garantizar seguridad jurídica y vigencia efectiva del debido proceso.

Al definir de forma simple al derecho procesal como la rama del derecho que estudia el proceso, hay quienes han buscado delimitar el objeto de su estudio, y el profesor Davor Harasic (2003) proporciona los siguientes conceptos, tomando como referencia ciertos doctrinarios reconocidos en la rama del derecho procesal:

*“Es el conjunto de normas que regulan la acción de la ley en el proceso y particularmente la relación procesal”* (Giuseppe Chiovenda, 2003 p.04)

*“Conjunto de reglas que establecen los requisitos y efectos del proceso”*. (Carnelutti, 2003, p.04)



Conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado, para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización, la determinación de la competencia de los funcionarios que la integran, y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso. (Alsina, 2003, p.04)

A su vez el Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 18 expresa:

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. (p.08)

El derecho procesal como disciplina jurídica científica, es complejo en su estructura y contenido, por lo que se ha llevado a precisar con más amplitud que su objeto de estudio está compuesto por un trinomio jurídico constituido por las teorías de la acción, la jurisdicción y el proceso, que en un Estado como el nuestro, debe realizarse desde la perspectiva del Derecho Constitucional, pues este es el punto de partida, fundamento y límite de las distintas ramas del derecho.

## **2.2 ELEMENTOS ESENCIALES EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO.-**

Con lo antes mencionado, podemos determinar los elementos esenciales del procedimiento monitorio, aquellas esferas que nos permiten satisfacer los intereses jurídicos y así precautelar los derechos legítimos de las personas, y estos son:

**2.2.1 La acción:** El término acción viene del latín “actio” y del verbo “agere” cuyo significado es obrar, realizar, actuar. A su vez la acción se origina en las máximas jurídicas romanas, *nemo iudex sine actore*, no puede existir un proceso si no hay actor.

El profesor Guillermo Cabanellas (2011) también da su aporte y define a la acción como:

Denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar éste. En cuanto derecho, consta en las leyes sustantivas (códigos civiles, de comercio, penales y demás leyes, reglamentos, etc.); en cuanto modo de ejercicio, se regula por las leyes adjetivas (códigos procesales). (p.16)



Como observamos, el vocablo acción tiene múltiples significados, que van desde el actuar físico a acepciones jurídicas de reclamar ante un tribunal o simplemente de demandar. A nosotros nos interesa aquel que denota el reclamar un derecho en juicio, pues si no hay un derecho violado o en riesgo, no hay acción, demanda ni juicio.

Todos los ciudadanos de un Estado, tienen el derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional y solicitar seguridad jurídica, como sabemos, la ley reconoce a la persona desde su nacimiento la capacidad adquisitiva, es decir, aptitud jurídica para ser titular de una amplia gama de los llamados derechos subjetivos, que en nuestro país se encuentran protegidos por las leyes que integran el ordenamiento jurídico.

Por esa razón, de todo derecho subjetivo se origina una relación jurídica en la que hay un sujeto activo, titular del derecho, y otro pasivo llamado a respetar ese derecho, lo que es derecho para uno, es obligación para otro. Pero como sabemos, el ser humano consciente o no, se involucra en conflictos que afectan derechos subjetivos, lo que conlleva a la transgresión de la norma de derecho objetivo que los protege, ante esta situación se genera en el perjudicado otro derecho denominado acción, que a través de una demanda solicitará al juez la reparación de los derechos violentados.

El derecho de la acción como lo define la doctrina, es un derecho potestativo, que queda a la decisión del afectado de practicarlo o no. Por ejemplo. La relación jurídica sustantiva en un crédito es entre acreedor y deudor, si existiera violación a los derechos de uno de ellos, se verán en la necesidad de enfrentarse en la relación jurídico procesal, en búsqueda de una resolución judicial con el fin de que impere la justicia.

Ante esta situación decimos que frente a cada derecho vulnerado, la ley determina la acción correspondiente. Así la violación a un derecho de crédito por falta de pago, genera a favor del afectado una acción personal crediticia.

El análisis de la teoría de la acción es la puerta de entrada al estudio del proceso, por eso es fundamental dentro de la ciencia procesal entender sus instituciones, en nuestro caso, sirve de partida para el análisis estructural del procedimiento monitorio.

Históricamente han existido dos tesis importantes de la acción, dos caras contrapuestas, una teoría clásica, que no considera a la acción como una entidad jurídica autónoma y defiende la idea, que el derecho subjetivo emana del derecho sustantivo, confundiendo la acción con el derecho que se hace valer en juicio, en otras palabras,



acción y derecho sustantivo son la misma cosa. Uno de sus defensores es Chiovenda, quien sostiene que *no hay acción sino hay derecho lesionado*.

Por otro lado están los que defienden a la teoría moderna o procesalista, que concibe a la acción como la posibilidad de acudir a la administración de justicia, logrando establecer la clara distinción entre la acción como derecho regulado en la ley sustantiva; y la acción como modo de ejercicio, normado en la ley procesal, entre sus defensores esta Couture (2010), quien define a la acción como: *“Poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión.”*

Hoy en día y gracias a la técnica jurídica, se conceptúa la acción desde diferentes criterios doctrinarios, ideas recogidas por el profesor F. Illanes en su obra La Acción Procesal.

*“La acción es el poder jurídico de excitar y promover el ejercicio de la jurisdicción”.* (Goldschmidt, 2010, p.4)

*“La acción es un derecho público subjetivo contra el Estado para que este conceda tutela jurídica”.* (Floreano, 2010, p.4)

*“La acción constituye un derecho autónomo y anterior al proceso de carácter subjetivo cívico procesal y abstracto”.* (Carnelutti, 2010, p4)

Para terminar y recordando las clases de Derecho Procesal Civil, el Dr. Kaisser Machuca (2015), considera a la acción como:

Un derecho civil potestativo de protección, reconocido y garantizado por la Constitución y la ley a favor de toda persona afectada en sus derechos subjetivos, en miras a lograr por medio del debido proceso, una resolución de autoridad que imponga respeto, reivindicación, reparación o abstención de atenderlos.

#### **2.2.1.1. Elementos de la acción:**

- **Las partes procesales:** El sujeto activo, titular del derecho lesionado y quien tiene el poder jurídico de ejercer la acción. En el procedimiento monitorio sería el acreedor. Y el sujeto pasivo o deudor.
- **El objeto:** Es el derecho subjetivo afectado y que al exigirse en juicio se denomina pretensión, en este caso sería el crédito.

- **La causa:** También conocida como causa pretendi, que es la causa o antecedente del derecho y la norma vulnerada. Para nuestro estudio sería el incumplimiento de pago.

**2.2.2. La jurisdicción:** Etimológicamente el termino jurisdicción deriva del latín “jus” y “decidere”, traducido a nuestro idioma es declarar en derecho. La función de dictar el derecho es específica de los jueces, es decir, el Estado promueve la justicia a través de sus órganos judiciales.

Históricamente la jurisdicción sintetiza la evolución en la solución de conflictos, como se dio en Roma, donde el rey administraba justicia en su nombre a través de funcionarios delegados por el mismo y que más tarde llevaban el nombre de “*arbiters*” y “*juders*”. En nuestros días no se discute que el poder emana del Estado y la administran funcionarios públicos llamados jueces. Por esta razón nuestra Constitución en el artículo 167 consagra el principio de soberanía popular y nos dice: “*La potestad de administrar Justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución*”.

Jurisdicción debe entenderse como esa función pública en miras a resolver las controversias cuando la ley ha sido quebrantada, potestad de administrar justicia encargada a los órganos judiciales con el fin de que resuelven en sentencia los conflictos de intereses sometidos a su conocimiento.

Antes de pasar a definir la palabra jurisdicción, tenemos que prevenir al lector, que muchas de las veces este término se lo utiliza impropiamente, la más común, como sinónimo de competencia, por ejemplo cuando se inicia una demanda laboral ante un juez de lo civil y este se inhibe de conocer la causa porque corresponde a la “jurisdicción laboral”.

El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 150, señala que: “*La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la competencia*”. Con esta definición se obliga al director jurídico del proceso o juez, motivar sus fallos desde una perspectiva constitucional y ya no desde la estricta legalidad tradicional, pues consagra principios



constitucionales como los de unidad jurisdiccional a fin de garantizar la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e interés de las personas.

Juan Montero Aroca (2012) define a la jurisdicción así:

Potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por tribunales independientes y predeterminados por la Ley, de realizar el derecho en el caso concreto, juzgándolo de modo irreversible y ejecutando lo juzgado para satisfacer las pretensiones y resistencias de las partes. (p.01)

Para Giuseppe Chiovenda (2012) en cambio la jurisdicción es:

La función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la substitución de la actividad individual por la de los órganos públicos, sea para afirmar la existencia de una actividad legal, sea para ejecutarla ulteriormente.

Con estas definiciones podemos decir que el fundamento de la jurisdicción es restablecer la paz social cuando existe un conflicto de intereses, donde el juez reemplaza la facultad de raciocinio de las partes procesales que no pudieron solucionar sus problemas en privado y acuden a la administración de justicia para que el magistrado revestido con jurisdicción aplique e interprete la norma.

La jurisdicción comprende tres funciones, la actividad de conocimiento, que se ve reflejada al momento de presentar la demanda. La actividad de juzgamiento, que tiene que ver mucho con conciliación de las partes, valoración de las pruebas, resolución y recursos de impugnación. Y la actividad de imperio, que es la ejecución de las sentencias.

#### **2.2.2.1. Características de la jurisdicción**

- La imparcialidad del juez.
- Trato igualitario por parte del juez hacia las partes procesales.
- Limites en las facultades del juez, evitando el autoritarismo.
- La necesaria audiencia y comparecencia de las partes.
- El impulso de oficio y resolución motivada en los términos legales.
- La intervención del juez como director jurídico del proceso.

**2.2.3. El proceso:** El enlace entre la acción y jurisdicción, genera un tercer elemento que es el proceso, consolidándose la trilogía jurídica de la ciencia procesal. La palabra proceso proviene del latín *processus*, que significa marchar hacia delante.



Nuestro código orgánico general de procesos, no da una definición de proceso, por esto acudimos a la doctrina para empezar analizarlo.

Según Enrique Vescovi (2012):

El proceso es el medio adecuado que tiene el Estado para resolver el conflicto reglado por el derecho procesal, que establece el orden de los actos (procedimientos), para una correcta (legal) prestación de la actividad jurisdiccional constituye un haz de situaciones (o relaciones jurídicas), en el que se dan diversos derechos, deberes, poderes, obligaciones o cargas. (p.01)

Devis Echandía (2012):

Conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener, mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas. (p.02)

Como conclusión, el proceso es el resultado de la sumativa jurídica de actos, desde el momento en que el afectado presenta su demanda ante el órgano jurisdiccional y este le admite a trámite.

El proceso tiene como finalidad conjugar el interés individual con el social y el jurídico del Estado, es decir, busca la resolución de los conflictos de los particulares, el restablecimiento del orden jurídico alterado por el choque de intereses, y la obtención de la paz social.

### **2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO.-**

El procedimiento monitorio tiene características propias que lo vuelven especial en comparación a otros procesos, por ese motivo y como lo hemos venido anunciando, el procedimiento monitorio es ese procedimiento judicial híbrido, especial y sumario que permite reclamar una cantidad de dinero vencida, líquida y exigible con límite en la cuantía de hasta cincuenta salarios básicos unificados.

El proceso monitorio tiene como objeto el cobro de obligaciones ejecutivas dinerarias (deuda líquida, exigible, de plazo vencido y que constituya plena prueba contra el deudor) que no consten en algún título ejecutivo, acreditando la deuda a través de cualquier

documento sin importar su forma, siempre y cuando conste la firma, sello o rubrica del deudor.

Según el artículo 356 del COGEP, *“La persona que pretenda cobrar una deuda de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio. (...)”*, es decir, el acreedor que se sienta afectado en el incumplimiento de las obligaciones correlativas por el deudor, podrá demandar en proceso monitorio el pago a su favor así la obligación no esté garantizada en un título ejecutivo, sino que la obligación debe ser ejecutiva más no el título, esto significa que la deuda debe ser líquida, exigible y de plazo vencido, razón por la que el legislador ecuatoriano decidió insertar este procedimiento en los procesos ejecutivos.

Con este preámbulo podemos decir que las características innatas del procedimiento monitorio son:

- 1. Es un proceso híbrido, a veces de jurisdicción voluntaria y otras de jurisdicción contenciosa:** Lo que significa que dependerá de la oposición que haga el demandado, es decir, una vez propuesta la demanda en proceso monitorio, el deudor si no se opone a la demanda y cumple con la obligación de pagar lo adeudado, el proceso sería de jurisdicción voluntaria porque existe el auto interlocutorio interpuesto por el juez que ordena el cumplimiento de pago en quince días, teniendo el mismo auto el efecto de cosa juzgada. Así el artículo 358 del COGEP manifiesta: *“La o el juzgador, una vez que declare admisible la demanda, concederá el termino de quince días para el pago y mandará que se cite a la o el deudor”*

Si la o el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición, el auto interlocutorio al que se refiere el inciso primero quedará en firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y se procederá a la ejecución. (...) (COGEP, Art. 358, inciso N° 3)

En estos casos, el procedimiento monitorio se convierte en un proceso de jurisdicción contenciosa cuando el demandado se opone a la demanda y formula excepciones, el juez convocará a una audiencia única existiendo traba de la litis e intereses contrapuestos. De la misma forma el artículo 359 del COGEP nos resalta aquello: *“Si la parte demanda*



*comparece y formula excepciones, la o el juzgador convocará a audiencia única, con dos fases. (...)”, iniciándose una verdadera contienda legal sometida a la resolución de los jueces.*

## **2. Solo en caso de oposición, puede deducir el demandado cualquier excepción:**

En ese sentido y a diferencia del procedimiento ejecutivo en que la ley expresamente determina que excepciones puede fundarse el demandado para la defensa de sus intereses, la norma le da carta abierta al contradictor en el procedimiento monitorio para que alegue su contestación.

En otras palabras, el acreedor al ser el sujeto activo del proceso presenta ante el juez como prueba documental cualquier representación escrita o tecnológica que conste la existencia del crédito, creando una desventaja jurídica para el demandado, porque la ley supone que existe incumplimiento de la obligación dineraria. Ante tal situación, el código permite al demandado presentar cualquier tipo de excepción que crea conveniente para su defensa, como sabemos, el documento informal que no constituye título ejecutivo pero si una obligación ejecutiva, carece de veracidad. A manera de ejemplo, las excepciones que el demandado podría plantear son:

- Nulidad de lo actuado.
- Falta de derecho del actor para proponer la acción planteada.
- Inejecutabilidad del documento y de las obligaciones dinerarias.
- Prescripción de la acción e improcedencia de la misma.

## **3. La Audiencia única, se cumple en dos fases:** El sistema oral que impera en nuestro sistema procesal, vuelve realidad algunos principios como los siguientes:

- **Principio de Contradicción:** Según Juan Montero Aroca (2000) afirma:  
Los actos procesales deben desarrollarse en una sola audiencia, o en todo caso en unas pocas audiencias próximas temporalmente entre sí, con el objetivo evidente de que las manifestaciones realizadas de palabra por las partes ante el juez y las pruebas permanezcan fielmente en la memoria de éste a la hora de dictar sentencia. (p.380)
- **Principio de Inmediación:** El Art. 6 del COGEP señala:  
La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos



procesales que estructuran de manera fundamental el proceso. Solo podrán delegar las diligencias que deban celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

Devis Echandía (2016) comenta que el principio de inmediación es aquel en donde:

El Juez debe entrar en contacto con los sujetos, los órganos y los auxiliares del proceso, lo mismo que con los hechos que constituyen el presupuesto de las normas jurídicas que debe aplicar, para el efecto de que exista un mejor conocimiento de causa que le permita resolver con acierto.

- **Principio de Celeridad Procesal:** El Art. 20 del COFJ señala:

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley.

Por ultimo cabe mencionar el principio rector en la administración de justicia.

- **Principio de Igualdad:** Nuestra Constitución de la República lo menciona en el Art. 76 N° 7 literal c):

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: **7)** El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: **c)** Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

Estos principios guían un debido proceso técnico jurídico que garantiza legalidad en la administración de justicia. Por esa razón, una vez que exista oposición a la demanda en el procedimiento monitorio, es decir, si el demandado comparece y formula excepciones, el juez declarará trabada la litis y procederá a fijar día y hora para que se lleve a cabo la audiencia única, que se realizará en dos fases:

**a. Primera fase:** Saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación.

A continuación procederé a analizar estos tres elementos:

- 1. Saneamiento:** El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como: *“Afianzar o asegurar la reparación o satisfacción del daño que puede sobrevenir”*, en otras palabras, se considera como sinónimo de reparar. En el procedimiento monitorio se refiere aquellos vicios que podrían provocar la nulidad del proceso, o también aquellas excepciones dilatorias como la incompetencia del juez que si no son saneadas en esta fase, provocaría nulidad de todo lo actuado.

Para no caer en error de competencia de los jueces, es preciso fijar que los procesos de naturaleza ejecutiva (deuda líquida, exigible, de plazo vencido y que constituya plena prueba contra el deudor) como el monitorio, además del juez del domicilio de la persona demandada, serán también competentes los siguientes, esto de conformidad con el artículo 10 del COGEP:

- *“Del lugar donde deba hacerse el pago”.*
- *“Del lugar donde se celebró el contrato”.*
- *“Del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato”.*

El COGEP en su artículo 153, manifiesta que las excepciones previas que se plantea en la fase de saneamiento son:

- *“Incompetencia de la o del juzgador”.*
- *“Incapacidad de la parte actora o de su representante”.*
- *“Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda”.*
- *“Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación de procedimiento o indebida acumulación de pretensiones”.*
- *“Litispendencia”.*
- *“Prescripción”.*
- *“Caducidad”.*
- *“Cosa juzgada”.*
- *“Transacción”.*
- *“Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación”*



Con estas excepciones vamos atacar asuntos importantes que permitan a las partes procesales celeridad y eficacia en el juicio, ya que años atrás, este tipo de excepciones llevaban un largo periodo de tiempo para que sean resueltas por el juez, quedando a un lado el asunto principal materia de la controversia. En la actualidad, el juez debe sanear este tipo de excepciones en la misma audiencia, ahorrando tiempo y dinero a las personas que acuden ante la administración de justicia.

2. **Fijación de los puntos de debate:** Es aquí donde resalta el principio dispositivo del derecho procesal, y que la doctrina lo ha llamado “principio del impulso de las partes”, que no es otra cosa que la iniciativa de las partes para el inicio progresivo del proceso. En nuestro sistema procesal civil, el principio dispositivo ha sido preponderante, pues el proceso comienza solo a iniciativa o instancia de parte *nemo iudex sine actore*, más el impulso no solo corresponde a las partes, sino a los respectivos jueces al tenor de los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial.

El Art. 20 COFJ prescribe. “(...) *En todas las materias, una vez iniciado el proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte. (...)*”.

Esto significa que se busca la comunicación entre la dirección jurídica del proceso, atribuido a los jueces, y el de cooperación, entre el juez y las partes. El actor en el procedimiento monitorio propone los fundamentos fácticos inherentes a los hechos, el fundamento de derecho y la pretensión concreta, a su vez el demandado hace oposición a esa demanda estableciendo las debidas excepciones, y en ese momento ha nacido una pugna de intereses o traba de la litis. Sobre los puntos que plantea el actor en su demanda y el demandado en su contestación, es lo que debe aludirse la prueba, entonces el principio dispositivo permite al juez observar la reproducción de la prueba sobre los puntos que la partes procesales anunciaron dentro del proceso.

La doctrina ha denominado a esta situación como el *tema decidendum del proceso*, tema sobre lo que el juez decidirá, delimitación que la realiza el actor en su demanda y el demandado en su contestación, constituyendo el infranqueable cerco dentro del cual debe agilizar el juez para resolver el litigio.

Con esto se entiende que el juez está en la obligación de resolver sobre lo que ha sido planteado en el juicio, por eso para el Dr. Patricio Santacruz Moya, se produce la falta de congruencia cuando: *“El juez da más de lo pedido (ultra petita); se den cosas que no se han pedido (extra petita) o se deje de resolver sobre algo pedido (citra petita)”*. (p. 50) Ante esta situación, las reglas del juego quedan establecidas acorde a los puntos sobre los que se trabó la litis.

- 3. Conciliación.-** El tercer elemento de la primera fase en la audiencia única es la conciliación, así lo define la Constitución de la República en su artículo 190, que ampara: *“Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir (...)”*.

La Real Academia de la Lengua Española define a la conciliación en materia de derecho como: *“Acuerdo de los litigantes para evitar un pleito o desistir del ya iniciado”* y es lo que realmente sucede en la práctica, buscar el acuerdo pacífico y ameno de las partes procesales, actividad que la cumple el juez del proceso para evitar confrontación en los alegatos siguientes y poder archivar el proceso.

En este sentido, el juez buscará el advenimiento de las partes procesales, dejando constancia en un acta de las exposiciones que se hagan y de las concesiones que se ofrezcan para llegar a conciliar. Si terminan en un acuerdo lícito, se aprobará por sentencia y el juez declarará terminado el juicio.

- b. Segunda Fase.-** Si las partes no llegaren a conciliar o el acuerdo es parcial, la audiencia pasará a un segundo plano, conformado por la fase de pruebas y alegatos.

- 1. Fase de Pruebas.-** En la misma audiencia el juez dispondrá que se practiquen las pruebas anunciadas en libelo de la demanda o contestación, ya que la fase probatoria es la columna vertebral de todo proceso, se constituye en el elemento más importante de la contienda legal.

Cabe recalcar que la prueba se la reproduce de manera oral, al tenor del artículo 159, inciso cuarto del COGEP: *“La práctica de la prueba será de manera oral en la audiencia*



*de juicio. Para demostrar los hechos en controversia las partes podrán utilizar cualquier tipo de prueba que no violente el debido proceso ni la ley”.*

Ante este particular, la única prueba eficaz en el Procedimiento Monitorio sería el documento informal como facturas, telefax o notas de entrega, en las que conste la firma del deudor o resalte la existencia de un crédito. Todas estas pruebas serán analizadas a profundidad en el capítulo siguiente de este trabajo monográfico, pero es necesario pronunciarnos brevemente sobre la fase de prueba en la audiencia única de este proceso.

La ley exige que en el procedimiento monitorio se debe aparejar a la demanda el documento que acredita la existencia de la deuda. Art. 357 COGEP:

El procedimiento monitorio se inicia con la presentación de la demanda que contendrá además de los requisitos generales, le especificación del origen y cantidad de la deuda; o con el formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. En cualquiera de los casos, se acompañará el documento que pruebe la deuda.

Y a su vez el Art. 159 del COGEP estatuye: *“La prueba documental con que cuenten las partes o cuya obtención fue posible se adjuntará a la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, salvo disposición en contrario”.*

En la parte práctica, si el demandado comparece en primer término y realiza oposición a las pretensiones del actor, tiene limitadas objeciones para defender su verdad, pero por el “principio de contradicción”, donde se proclama que ambas partes tienen los mismos derechos a ser escuchados, practicar pruebas para confrontar sus pretensiones a fin de asegurar la justa composición de la litis, el cabal ejercicio del derecho a la defensa y respeto al debido proceso, permite que el demandado formule las diferentes pruebas solicitadas en su oposición a la demanda, así lo prescribe el Art. 359 del COGEP:

Si la parte demandada comparece y formula excepciones, la o el juzgador convocará a audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. Si no hay acuerdo o este es parcial, en la misma audiencia dispondrá se practiquen las pruebas anunciadas (...).

En esta fase, se podrá practicar prueba pericial documentológica para determinar la autenticidad de la firma o rubrica en los documentos aparejados a la demanda.

La peritación es una actividad probatoria que se desarrolla dentro de un proceso y por mandato judicial, a solicitud de parte interesada o de oficio, con el objeto de verificar y obtener elementos de juicios y convencimiento sobre hechos o materias en litigio que escapen al conocimiento o aptitudes del juez. El Art. 221 del COGEP, determina lo siguiente: *“Es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia”*.

Ante esta situación, en el procedimiento monitorio se podrá solicitar la práctica de un perito calígrafo, quién es capaz de describir y analizar aquellos rasgos gráficos propios del autor y evitar la falsificación de firmas en los documentos presentados ante el juez.

**2. Alegatos.-** Según el diccionario jurídico de Cabanellas, lo define así: *“Demostración de las razones de una parte para debilitar las de la contraria”*. (p.29)

Esta es la etapa final en la audiencia única previa resolución del juzgador. Aquí las partes procesales presentan su teoría del caso, puntualizando los elementos fácticos y de relevancia jurídica, según la estrategia del abogado.

El alegato inicial resume la teoría del caso, es informativo porque realiza la propuesta de lo que se probará durante el juicio. Si se llega a errar en la propuesta, se perdería credibilidad y tendría pocas probabilidades de lograr una decisión favorable.

Según Julio Aguayo, citado por el Dr. Pablo Castañeda (2015), el alegato de apertura debe contener como mínimo lo siguiente:

- **Introducción:** *“Es el inicio del alegato de apertura y por lo tanto debe ser claro y conciso, debe captar la atención inmediata del juzgador”*.
- **Cuestiones fácticas y jurídicas:** *“Se identifica a los sujetos procesales; el abogado detalla de manera esquemática los hechos y su relevancia jurídica; los hechos: estos se deben señalar tanto el tiempo (cuándo), el lugar (dónde), el modo (cómo), la causa (porqué) y cuál es la relevancia jurídica de dicho acto”*.
- **Solicitud de práctica de pruebas:** *“Siendo el alegato de apertura una promesa, se señala los elementos del caso y su relevancia”*.



El alegato final, es la última oportunidad que tienen las partes procesales a través de sus abogados para deslucir el análisis de las pruebas presentadas.

Nuestro sistema procesal civil con la implantación del sistema oral, permite que los abogados en esta fase dominen con tal sutileza la oratoria jurídica para el convencimiento del juzgador. Por ese motivo, el Art. 297 N° 6 del COGEP estatuye lo siguiente en cuanto a los tiempos de intervención: “(...) *La parte actora, la parte demandada y las o los terceros de existir, en ese orden, alegarán por el tiempo que determine equitativamente la o el juzgador, con derecho a una solo replica (...)*”.

Para terminar, las partes procesales deben cumplir con la promesa que asumieron en su alegato de apertura, esa es la clave para tener éxito en el procedimiento monitorio.

#### **2.4 CASOS EN LOS QUE CABE EL PROCEDIMIENTO MONITORIO.-**

El Art. 356 del Código Orgánico General de Procesos, desarrolla el nacimiento de este procedimiento al prescribir lo siguiente:

La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, liquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio (...).

La obligación fundamental para el cobro de obligaciones en el procedimiento monitorio, es la de naturaleza contractual, es decir la que se establece en un convenio bilateral, entendido a este contrato como aquel en que las partes contratantes se obligan recíprocamente. El Art. 1561 C. Civil sobre este aspecto establece: “*Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes (...)*”. Ante esto, el pago no sería válido mientras no exista obligación natural o civil designada a extinguir aquel negocio jurídico entre acreedor y deudor, ya que, el que paga lo que no debe, estaría cumpliendo una obligación sin justa causa.

Este antecedente permite percibir las características que un acreedor debe tomar en cuenta al momento de iniciar una demanda en vía monitoria para obtener el pago de una obligación, estas son:

- 1. Obligación dineraria.-** El COGEP exige en primer término que las obligaciones deben ser de carácter dinerario, es decir, lo que se debe es dinero sin importar la



moneda en que venga expresado. Ante esta situación, es importante recurrir al C. Civil e identificar dentro de la clasificación de las obligaciones cuales son las que encierran las de carácter dinerario.

Si en el procedimiento monitorio existe un acreedor y deudor, básicamente estamos frente a un contrato o convenio. Por eso el Art. 1454 del C. Civil, define al contrato de este modo: *“Contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa (...)”*. Con esto se puede acotar que las deudas dinerarias están dentro de las obligaciones de dar, es decir, permiten transferir a favor del acreedor el derecho de dominio, así el Art. 1564 del C. Civil, permite: *“La obligación de dar contiene la de entregar la cosa (...)”*.

De lo mencionado podemos indicar que las deudas dinerarias pertenecen a las obligaciones de dar, cuya finalidad es el pago de una cantidad de dinero por el convenio establecido, previo a una demanda interpuesta por el sujeto activo. No se puede considerar una deuda dineraria en las obligaciones de hacer, por ejemplo, el deudor se compromete a otorgar una escritura pública a favor del acreedor en cierto plazo determinado, no estaríamos hablando de deuda dineraria sino de una obligación de cumplimiento.

Las obligaciones dinerarias poseen una individualidad propia, así lo recita Fernando Hinestrosa (2007), *“La obligación pecuniaria es la de su individualidad propia, distinta de las demás, en atención a la naturaleza misma de su objeto: dinero, que muestra caracteres singulares”*. (p.100) En este sentido abarca aquel supuesto, que lo que se debe es susceptible en dinero.

También la moneda extranjera es considerada como referencia para las obligaciones pecuniarias y que se introduce en este tipo de procedimiento de acuerdo a la doctrina. Por eso algunos autores plantean la posibilidad de exigir en procedimiento monitorio la deuda en moneda extranjera pero que esté sujeta a cotización oficial.

De lo escrito sobre la naturaleza de las obligaciones pecuniarias, es menester determinar la forma de extinguir este tipo de imposición jurídica. Según nuestro C. Civil en su Art. 1583, deja desglosado las distintas formas de extinguir las obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero lo que nos compromete al análisis de este proyecto de investigación, es lo que respecta al procedimiento monitorio, por tal



razón no se va analizar todas las formas de extinción, sino las que funcionan en este tipo de proceso.

Así tenemos en primer lugar a la solución o pago efectivo, la forma más obvia de cumplir las obligaciones y quedar liberado de aquella responsabilidad, normalmente no se piensa ni siquiera en convenir con el acreedor para extinguir la obligación, lo único que se busca es honrar ese contrato, ya que de acuerdo al Art. 2327 del C. Civil, el acreedor podrá agotar todos los medios incluso con los bienes del deudor hasta ejecutar completamente. Con lo antedicho, se podría definir al pago, como aquella prestación de lo que se debe, más el Art. 1585, inciso segundo del C. Civil, establece: *“El acreedor no estará obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser igual o mayor valor la ofrecida”*.

Es decir, cuando se está comprometido a pagar una deuda, sé que la voy a poder extinguir si cumplo con el pago y no con otra, ya que el deudor no puede obligar bajo ningún concepto al acreedor a que reciba cosa distinta a la que se comprometió, este fragmento de la ley sustantiva escolta muy bien a la del COGEP en lo pertinente al cobro de obligaciones en vía monitoria. Incluso Alessandri (2004) ya lo había mencionado mucho antes:

En cuanto la forma en que debe pagarse, es decir, a la cosa que debe darse en pago y a las condiciones en que la cosa pagada debe entregarse, hay dos reglas fundamentales que rigen toda esta materia y son: 1) el pago debe hacerse con la misma cosa que se debe, esto es, debe pagarse con la cosa que constituye el objeto de la obligación; y 2) al pago debe hacerse totalmente y no por parcialidades. (p.22)

**2. Obligación líquida.-** No toda deuda puede ser reclamada en procedimiento monitorio, por eso el COGEP establece las cualidades que debe cumplir la deuda para poder demandar; la subsecuente característica a analizar y que permite iniciar el trámite en vía monitoria es sobre la deuda líquida. Para un mejor entendimiento se debe partir de la definición técnico jurídico, por eso el Glosario de Derecho Civil lo define de la siguiente manera: *“Es líquida aquella obligación cierta en cuanto a su existencia y su cuantía se encuentra determinada”*.

La liquidez de las obligaciones entonces hace referencia a las de dar o entregar una cosa, en este caso la cantidad debida. Lo que se quiere decir es que el valor que se pretende

cobrar sea claro o específico; además la definición trae a colación otro dato importante sobre la “determinación de la deuda”, que sería en el procedimiento monitorio aquella virtud de establecer con claridad el importe numérico correspondiente, al que se comprometió a pagar el deudor a consecuencia de ese contrato informal realizado con el acreedor.

Para que no haya confusión en los términos determinable y líquido, es importante nombrar el el criterio de los hermanos Martín Jiménez (2010) que opinan sobre este particular y manifiestan lo siguiente:

*Puede afirmarse que la cantidad líquida es el género, mientras que la cantidad determinada o susceptible de determinación constituyen las especies de ese género, de modo que toda cantidad determinada es cantidad líquida, pero no toda cantidad líquida es cantidad determinada.* (p.408)

La jurisprudencia española encontró una solución para la diferenciación de estos términos y que son referentes para la solución de conflictos en miras a una justicia pronta y oportuna. Los tratadistas Cueto, Abeso y Martínez (2008) transcriben el criterio de la Sala de lo Civil en Valladolid: “*Cuando de deudas dinerarias se trate, como cantidad determinada o líquida debe de entenderse no solo la fijada de manera cierta, sino también aquella que es fácil de determinar con sencillas operaciones aritméticas*”. (p.370)

A criterio personal considero que la deuda líquida, es aquella obligación de carácter pecuniario o dinerario establecida en el objeto de la demanda en forma clara y específica, determinando con exactitud los valores que el deudor se comprometió a cancelar a través de la derivación de un contrato con el acreedor.

**3. Obligación exigible.-** La característica de exigibilidad no hace más que referirse al momento en que debe ser cumplida, aquí nace un derecho subjetivo para el acreedor en exigir la deuda vencida y para el deudor se crea una obligación dineraria que se deberá cumplir de conformidad a los preceptos legales.

De acuerdo a lo preceptuado por el C. Civil, este tipo de característica sobre exigibilidad hace referencia a las llamadas obligaciones de plazo, en las que se fija una fecha para que se ejecute el cumplimiento de la obligación. De esta forma lo establece el Art. 1510: “*El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo*”.



Las obligaciones a plazo pueden ser solo exigidas si ha expirado el periodo al que se comprometió a pagar el deudor, antes no, esto en diferencia con las obligaciones condicionales que pueden ser exigidas antes del plazo establecido si no se ha cumplido con la condición pactada. De esta forma lo explica el Dr. Jorge Baraona (1997): “*La llegada natural del termino de pago hace exigible la obligación, y permite a las partes actualizar sus facultades (exigir el cumplimiento y pagar incluso contra la voluntad del acreedor)*”. (p.508)

**4. Obligación de plazo vencido.-** El plazo está definido en la ley como el periodo de tiempo en el que está pendiente el cumplimiento o nacimiento de una obligación. A su vez el diccionario jurídico de Cabanellas (2011) lo define como: “*Tiempo o lapso fijado para una acción*”. (p.293) Se puede definir entonces a la obligación de plazo vencido como aquel hecho futuro y cierto del que depende el goce actual o extinción de un derecho.

En cuanto a los efectos del plazo vencido, la obligación no es exigible mientras está pendiente, pues se considera al plazo como un beneficio que tiene el deudor y que la ley ampara esta situación al no permitir que se lo establezca en mora si todavía existe el tiempo establecido para cumplir como deudor. Otro efecto importante en cuanto al plazo, es lo que determina el Art. 1511 del C. Civil: “*Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución*”, es decir, la persona que cancele las deudas antes del plazo establecido, no da obligación al acreedor restituir los valores cobrados, porque lo que se garantiza en primer término es el cumplimiento total del pago u obligación pecuniaria, sino se pondría en riesgo el patrimonio del acreedor.

Como sabemos, el plazo es la época que se establece para cumplir las obligaciones, así lo tiene manifestado nuestro C. Civil, por eso es importante establecer los diferentes tipos de plazo que prescribe nuestro código sustantivo: El plazo puede ser expreso, cuando las partes lo estipulan de forma explícita; y plazo tácito, cuando nace de la naturaleza de la obligación, es decir, se vuelve indispensable para el cumplimiento de la obligación.

No debemos olvidar, la figura de la aceleración de vencimiento, si bien está desarrollada en los contratos de mutuo que llevan a cabo las instituciones del sistema financiero, la ley no exceptúa a los contratos entre particulares establecer este tipo de

cláusulas en los diferentes negocios jurídicos que se vienen mencionado. De lo expresado, podemos decir que la aceleración de vencimiento o también llamada aceleración de pago, implica declarar vencida la obligación a voluntad del acreedor en los contratos de crédito, siempre y cuando el deudor deje de cancelar o permita el vencimiento de una o algunas cuotas establecidas, configurándose así una obligación exigible al momento de presentar la demanda.

**5. Limite en la cuantía.-** La siguiente característica es importante por dos circunstancias; en cuanto a lo permisible para dar inicio a una acción en vía monitoria y sobre el patrocinio o no del profesional del derecho.

La primera circunstancia a mencionar es sobre el límite cuantitativo que debe tener en cuenta el acreedor para poder accionar ante la administración de justicia el proceso monitorio. El Art. 356 del COGEP sobre este particular dispone lo siguiente: *“La persona que pretenda cobrar una deuda (...) cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. (...)”* Es decir, si para el 2017 tenemos un salario básico unificado de trescientos setenta y cinco dólares, multiplicado por cincuenta según lo prescrito en la ley, el resultado tope para iniciar una demanda en vía monitoria es de \$18.750 dólares, este sería el límite máximo a tener en consideración al momento de fijar la cuantía en el proceso monitorio y así poder reclamar el importe de la deuda vencida. Si el acreedor sobrepasa este límite en la cuantía, el efecto jurídico es la declaración sin lugar de la demanda por no reunir los requisitos de admisibilidad, teniendo que buscar otras medidas legales como recurrir a la vía ordinaria y solicitar el pago de una obligación natural y presentar todos los documentos que no constituyen título ejecutivos como probar deudas a través del principio de prueba por escrito.

En cuanto al patrocinio del abogado en el proceso monitorio, el inciso final del Art. 357 del COGEP dispone: *“Si la cantidad demandada no excede de los tres salarios básicos unificados del trabajador en general no se requerirá el patrocinio de un abogado”*. Disposición facultativa que permite a las partes procesales disponer de su voluntad en elegir o no a un profesional en el derecho. La interpretación que se le puede dar a este precepto jurídico tiene una connotación social; y es debido a la cuantía ínfima que se pretende discutir en la unidad judicial, por eso el legislador dispuso, que si se pretende reclamar deudas de hasta mil ciento veinticinco dólares según el salario básico unificado del 2017, las partes podrán acudir ante el juez sin patrocinio del letrado,

poniendo el alto el principio de economía procesal para el correspondiente ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero.

- 6. Que no conste en título ejecutivo.-** La última característica abordar para que sea admisible una demanda en vía monitoria, es sobre los documentos físicos que no consten en algún título ejecutivo. Por eso es necesario hacer una referencia breve sobre los títulos ejecutivos determinados en nuestra legislación.

Los títulos ejecutivos o también llamados títulos valores, según lo que dispone el Art. 347 del COGEP: *“Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer”* es decir, aquellos documentos que la ley atribuye la facultad necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación, por ejemplo, letras de cambio, pagarés a la orden, testamentos y aquellos documentos que otras leyes otorguen el carácter de ejecutivo. Este tipo de instrumentos legales son muy utilizados en la parte práctica comercial, pues sirven como títulos de crédito para garantizar diversos negocios jurídicos, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la ley.

De lo mencionado se puede decir entonces que para tener éxito en vía monitoria es necesario descartar los documentos que consten como títulos ejecutivos y reclamar con aquellas notas o apuntes informales en que se estableció la deuda en principio. Por eso es necesario citar los numerales del Art. 356 del COGEP y determinar las diferentes pruebas documentales que sirven como partida en el proceso monitorio:

- 1.** *“Mediante documento, cualquiera que sea su forma y que parezca firmado por la deudora o deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente de dicha deudora o dicho deudor”* (Art. 356, N° 1)

Lo único relevante es la firma, sello o marca del deudor que se compromete a cancelar la obligación dineraria en los plazos establecidos, así, no importaría si la firma o huella está grabada en cuaderno, cuadernillo, agenda o papel cualquiera, lo único importante es que se pueda justificar el préstamo u obligación pendiente de pago, esto hace que sean documentos informales creados por los contratantes y no por la ley como los títulos ejecutivos.

- 2.** *“Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o*

*comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos, que sean de los que comprueben la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor”.*

(Art. 356, N° 2)

Aquí estamos frente a otros documentos que no son considerados como títulos ejecutivos, pero tienen ciertas formalidades de carácter mercantil como la factura o notas de entrega, el acreedor puede hacer uso de estos documentos para demandar en vía monitoria, sin importar que conste la firma física si se puede demostrar que hay la existencia del crédito a través de los documentos electrónicos como la factura o correo electrónico. Es importante mencionar lo que dispone la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en el Art. 1. *“Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos”.* Y en el Art. 45 de la mencionada ley: *“Los contratos podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos”.* Es decir, esto sirve como prueba documental para poder acceder en vía monitoria y demostrar al juez que existe un negocio jurídico pendiente de pago.

3. *“Mediante la certificación expedida, por la o el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento educativo, u otras organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, asociaciones, u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el caso de servicios educativos”.* (Art. 356, N° 3)

Ahora los administradores o representantes legales de las distintas propiedades horizontales, podrán efectuar el cobro a través del proceso monitorio de manera ágil, con la sola certificación emitida por ellos mismos. A su vez los directores o rectores de las distintas instituciones educativas podrán accionar ante la justicia el cobro pendiente por deudas de matrículas, mensualidades y entre otras a los padres que estén pendientes de pago.

4. *“Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario se encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento*



*por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino este en uso del bien”. (Art. 356, N° 4)*

Este tipo de deudas arrendaticias debe tener ciertas premisas para que sean admitidas en el proceso monitorio. Cuando el arrendatario se encuentra en mora, el arrendador puede dar inicio en la vía monitoria siempre y cuando este con dos meses de atraso en las pensiones locativas y se continúe en uso del bien arrendado. Así lo dispone la Ley de Inquilinato en su Art. 30 literal a:

El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento y, por consiguiente, exigir la desocupación y entrega del local arrendado antes de vencido el plazo legal o convencional, solo por una de las siguientes causas: **a)** Cuando la falta de pago de las dos pensiones locativas mensuales se hubieren mantenido (...).

**5.** *“La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la reclamación y la prueba de la relación laboral.”*  
(Art. 356, N° 5)

El trabajador en general puede recurrir a la administración de justicia y proponer a través del procedimiento monitorio cualquier tipo de controversias que tengan que ver con la falta de pago en las remuneraciones mensuales o adicionales contra el empleador, justificando la relación de dependencia ya con un contrato de trabajo, rol de pagos, un memorándum o el mismo mecanizado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a esto se tiene que dejar indicado de manera singularizada en la demanda los montos adeudados a la fecha.

Si bien es cierto, la disposición reformativa sexta, numeral 6 sobre el Código de Trabajo, prescribe lo siguiente: Sustitúyase el artículo 575 por el siguiente: *“Las controversias individuales de trabajo, se sustanciarán en procedimiento sumario conforme lo prevé el Código Orgánico General de Procesos”*. Trae a la duda porque el COGEP permite reclamar también otras controversias en vía monitoria, a mi criterio es por el simple hecho que el legislador busco una forma rápida de solucionar pequeñas deudas salariales entre trabajador y empleador para que puedan ser satisfechas oportunamente y continuar con la relación laboral, en cambio, los otros conflictos que derivan de la relación laboral entre



patrono y trabajador, como el despido intempestivo o jubilación, se tienen que resolver en procedimiento sumario por la complejidad del caso en cuanto a las pruebas que se pretenden descargar.

## 2.5 LA DEMANDA EN EL PROCESO MONITORIO.-

**2.5.1 Forma y requisitos:** En términos generales, demanda es toda petición, solicitud o requerimiento, más para el derecho adjetivo, es el acto formal de iniciación procesal que permite al actor el ejercicio de la acción. Eduardo Couture, citado por el Dr. García Falconí (2013) define a la demanda como: *“El acto procesal introductivo de la instancia, por virtud del cual el actor somete su pretensión al juez con las formas requeridas por la ley, pidiendo una sentencia favorable a sus intereses”*. A su vez el catedrático Juan Lobato, citado por el Dr. García Falconí (2013) define a la demanda así: *“Es el acto de la iniciación del proceso, en el que se acumulan el ejercicio del derecho de acción y la interposición de la pretensión”*.

De tal modo la demanda es de gran importancia en el aspecto procesalmente hablando, pues no existe proceso civil sin demanda de parte interesada, y es que si el titular del derecho violentado no ejerce el derecho potestativo de la acción mediante una declaración de la voluntad que es la demanda, en la que precise lo que reclama o pretende, no puede aspirar a la tutela oficiosa del juez competente, pues desde las institutas de Justiniano se precisaba que “nadie puede ser obligado a demandar”. Entonces se podría definir a la demanda como aquel acto formal de iniciación procesal en que el actor, fundado en argumentos de hecho y derecho, reclama ante el juez competente una pretensión que pide sea cumplida por el demandado.

**2.5.2 Funciones de la demanda:** La demanda tiene diversas funciones en el derecho adjetivo, pero las más notables e importantes son:

1. Es el punto de partida del proceso.
2. Impone al juez la obligación de asegurar su propia competencia.
3. Faculta al juez sustanciar el procedimiento aunque no exista petición de parte.
4. Fija los límites para precisar una sentencia objetiva de acuerdo a la ley.

**2.5.3 Requisitos procesales:** Si la demanda es un acto formal, para que sea admitida como clara y completa en vía monitoria, se debe cumplir con los requisitos de

fondo y forma señalados en el Código Orgánico General de Procesos. Si el actor no establece con precisión los requisitos formales de la demanda, dará fundamento al sujeto pasivo a que deduzca excepciones a su favor. Por esta razón el Art. 357 del COGEP, prescribe lo siguiente: *“El procedimiento monitorio se inicia con la presentación de la demanda que contendrá además de los requisitos generales, la especificación del origen y cantidad de la deuda. (...)”*.

Con este antecedente nos remitiremos al Art. 142 del mismo cuerpo legal que dispone los requisitos formales que debe contener una demanda por escrito:

- 1. La designación de la o del juzgador ante quien se propone:** Hace referencia al juez competente en razón del territorio, materia, grado y persona.

Entiéndase a la competencia como lo define el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 156 que expresa: *“Competencia es la medida dentro de la cual, la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados”*. Por esa razón el abogado patrocinador previo a entablar una demanda, deberá identificarlo con exactitud, ya que su error acarrearía que el demandado deduzca excepción de falta de competencia y como resultado se declare sin lugar la demanda.

- 2. Los nombres y apellidos completos, número de cedula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado. Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante legal se hará constar también los datos de la o del representado:** Es decir los datos completos que permitan identificar al sujeto activo de la acción, ahora con el nuevo sistema procesal se amplía la gama de datos de identificación a diferencia del antiguo Código de Procedimiento Civil que solo exigía ciertos datos para iniciar una demanda.

Ahora se requiere el número de cedula para evitar homónimos y así tener claro el panorama de identificación, no debemos dejar pasar por alto los casos de las personas jurídicas, que se deberá hacer constar su razón social e identificación de los representantes legales, ya que de existir litis consorcio, se determinaran los datos de todos quienes la integran, pues un error en los datos de identificación permitirá al demandado deducir

excepción de ilegitimidad de personería. El estado civil es importante porque hay acciones atribuidas a solteros, casados, viudos, que de no ejercerlas en esa calidad, provocará que el demandado alegue la falta de derecho o personería. En cuanto a la edad, es un requisito vinculado a la capacidad procesal del actor, ya que de ser menor de edad deben obligatoriamente intervenir sus padres, si se acciona directamente, el demandado aducirá la excepción de falta de personería activa por no poseer capacidad procesal. La profesión u ocupación, es decir la actividad u oficio que el actor ejerce de forma pública o privada, es importante por ejemplo en los casos de una acción redhibitoria por vicios ocultos en un vehículo propuesta por un mecánico automotriz que teniendo conocimientos en la materia no podría beneficiarse de su propia negligencia. En cuanto a los datos domiciliarios físicos o electrónicos, servirán como exigencia de ley para tener una completa información del accionante y que en la actualidad por la globalización es muy fácil acceder a correo electrónico o mail. También es indispensable como anteriormente se lo venía haciendo, establecer el casillero judicial o electrónico para las futuras notificaciones de la causa.

3. **El número del registro único de contribuyentes en los casos que así se requiera:** Esto dependerá del asunto que se litiga, como por ejemplo los actos de reclamación administrativa o tributaria, de vital importancia establecer el RUC para identificar la actividad comercial de la que se está alegando ante el juez.
4. **Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado, además de dirección electrónica, si se conoce:** Por la expresión nombres completos, impone señalar el o los nombres y el o los apellidos del demandado aunque a veces resulte complejo precisarlo, como también el correo electrónico si se conociere, para efectos de hacerle saber el contenido de la demanda. En cuanto a la designación del lugar en que debe citarse al demandado, se puede decir que por ser un acto solemne, la citación es el que permite al demandado conocer el contenido de la demanda y ejercer su defensa, la indicación del domicilio debe ser exacta, a fin de que el citador practique con seguridad su trabajo y así evitar falsas citaciones que provocarían nulidades procesales.
5. **La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados:** Se

hace referencia a lo que en doctrina se denomina como “causa petendi”, que son las circunstancias claras y precisas o los bien llamados presupuestos materiales que motivan la demanda. En esta parte el actor relata hechos generalmente constitutivos que pretende se subsumen en el supuesto del fundamento de derecho que considera debe aplicar el juez en su resolución, con la novedad que deben ser desglosados y numerados para un mejor entendimiento del juzgador.

**6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad y precisión:** Estamos hablando del sustento legal o presupuesto jurídico sustancial de la pretensión. El fundamento de derecho puede estar constituido por una o más normas constitucionales, legales o precedentes jurisprudenciales obligatorios.

**7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica:**

Con el Código Orgánico General de Proceso, es una novedad sustancial el adjuntar los diferentes soportes probatorios, distinto a lo que establecía el derogado Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, ahora en la demanda se debe anunciar la prueba que se va hacer valer dentro de la fase de reproducción de prueba con el acompañamiento de toda la documentación que se tenga por ser el momento procesal para realizarlo. Así el Art. 169 del COGEP dispone lo siguiente: *“Es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda (...)”* Es decir, en el proceso monitorio lo sustancial es adjuntar el documento físico o electrónico que demuestre la existencia plena del crédito a cobrar, sin que tenga mucha trascendencia la prueba testimonial que se presente en la audiencia única, pues los testimonios hoy no se cuentan, sino se pesan.

- 8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso:** Cuando se requiera de pruebas, en este caso documentales y que están en manos de un tercero, se deberá anunciar y solicitar al juez en la demanda que remita a las diferentes instituciones públicas o privadas certificación sobre el objeto materia del conflicto. Siempre y cuando haya relación con la pretensión de la acción, es decir, que sea útil y contundente para poder reproducirlos en la hora y día de la audiencia. Por ejemplo, se solicita al Señor Juez se envíe atento oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que certifique sobre el movimiento migratorio del demandado.
- 9. La pretensión clara y precisa que se exige:** También llamada petitum o pretensión expresa y concreta que formula el actor para que se mande a cumplir al demandado lo que se debe. La petición que se realiza en el proceso monitorio es de carácter patrimonial, porque lo que se debe es una cantidad única de dinero más los intereses.
- 10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento:** Permite al actor determinar el valor de su pretensión, en el proceso monitorio al ser de carácter dineraria la obligación, estamos frente a una cuantía determinada, es decir, como estoy demandado el pago de una deuda, la cuantía se fijará por el capital e intereses. Así lo manifiesta el Art. 144 del COGEP: *“Para fijar la cuantía de la demanda, se tomaran en cuenta los intereses líquidos del capital, los que estén pactados en el documento con que se proponga la demanda y los frutos que se han liquidado antes de proponerla”*.
- 11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa:** Esta es una exigencia no solo legal, sino constitucional del debido proceso, así lo permite nuestra Constitución de la República en su Art. 76 N° 3: *“Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”*. Entonces es obligación del actor precisar el trámite o procedimiento que debe darse a su demanda; y, ahora con el COGEP resulta muy fácil establecer el trámite a seguirse, ya que desde el artículo 356 del

mismo cuerpo legal desarrolla todo un capítulo sobre los asuntos a ventilarse en vía monitoria.

**12. Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del defensor salvo los casos exceptuados por la ley. En caso de que la o el actor no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva razón:** En cuanto a la firma del actor y del profesional que le patrocina, se debe mencionar que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Judicial y de la Federación de Abogados, no se admitirán escritos que no lleven la firma del abogado salvo algunas excepciones, y en nuestro caso particular, el proceso monitorio es uno de tantos conflictos judiciales que no necesitan la firma del profesional siempre y cuando la cantidad demandada no exceda de los tres salarios básicos unificados del trabajador, caso contrario necesitará obligatoriamente el patrocinio del profesional del derecho. Es importante mencionar que la ley es inclusiva, ya que permite accionar ante la administración de justicia a personas que no sepan firmar, pues con insertar su huella digital y la razón respectiva del funcionario judicial, está facultado a exigir justicia pronta y efectiva.

**13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso:**

En el procedimiento monitorio se podría mencionar lo que establece el Art. 357 del COGEP, como requisito distinto pero sustancial para iniciar una demanda, estoy hablando sobre la especificación del origen y cantidad de la deuda. Es decir, establecer en detalle cuando se inició el préstamo pecuniario, el motivo del préstamo y la cantidad real debida, esto tiene sentido y concordancia con los documentos que se aparejaron a la demanda en vía monitoria.

**(Ver anexo 1.- Demanda Monitoria – pág. 95)**

**2.5.4 Diligencias preparatorias:** Se entiende por diligencia preparatoria aquella petición de parte, solicitada ante juez competente, con la finalidad de utilizar aquel acto jurídico para hacerlo valer en un futuro proceso.

Conjuntamente con la presentación de la demanda, se podrá solicitar al juez las diferentes diligencias preparatorias y asegurar el resultado práctico de la pretensión y poder garantizar la existencia de bienes a nombre del demandado sobre los que ha de ejecutarse la sentencia si resulta favorable.

De acuerdo a lo prescrito en el Art. 122 del COGEP, se podrá solicitar antes de presentar la demanda o conjuntamente las siguientes:

- *“La exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar o sobre lo que se practicará secuestro o embargo”*
- *“La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida”*
- *“El reconocimiento de un documento privado”*
- *“El nombramiento de curador o tutora para los incapaces”*

## **2.6 EFECTOS DE ADMISIÓN EN LA DEMANDA DE PAGO.-**

El siguiente capítulo a analizar se basa sobre el trámite respectivo al momento de presentar la demanda en vía monitoria. De tal manera que el actor o acreedor iniciará la acción en proceso monitorio con la presentación de una demanda según los lineamientos de los Arts. 356 y 357 del Código Orgánico General de Procesos.

Una vez presentada la demanda en la respectiva oficina de sorteos de la Función Judicial, el director jurídico del proceso en el término de cinco días verificará si cumple con los requisitos legales para que sea admitida a trámite, esto según el mandato del Art. 146 del COGEP: *“Presentada la demanda, la o el juzgador, en el término máximo de cinco días, examinara si cumple los requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al caso (...)”*.

Si esto no ocurriera o faltaré algún requisito de procedibilidad, el juez dispondrá que se complete la demanda en el término de tres días, pues el efecto de incumplimiento a esta providencia ocasionaría el archivo del proceso, así lo prescribe el inciso segundo del Art. 146 del COGEP:

Si la demanda no cumple con los requisitos previstos en este código, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la complete o aclara en el término de tres días, sino lo hace,



ordenara el archivo y la devolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias.

Es importante manifestar que el proceso monitorio no permite la reforma a la demanda ni la reconvencción, entiéndase a la reforma como la variación de elementos formales como la edad, estado civil, profesión, domicilio, trámite, cuantía, fundamentos de hecho, pretensión y otros; y a la reconvencción como aquella reclamación que al momento de contestar la demanda formula el demandado contra el actor, por derechos que tiene en su contra, en miras a lograr economía procesal, concentración en el debate y la resolución en una sola sentencia.

Luego del sorteo de rigor y admitida la demanda como clara y completa, la o el juzgador dictará el respectivo auto interlocutorio o requerimiento de pago y dispondrá la citación al demandado para que en el término de quince días pague, como lo establece el inciso primero del Art. 358 en el COGEP: *“La o el juzgador, una vez que declare admisible la demanda, concederá el término de quince días para el pago y mandará que se cite a la o al deudor”*.

**2.6.1 La Citación:** En sentido general la citación es el acto procesal por el cual el juez dispone la comparecencia a juicio del demandado, emplazándole para que conteste la demanda dentro de cierto tiempo ya que nadie puede ser condenado sin antes ser oído. De acuerdo al Art. 53 del COGEP:

La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador.

En definitiva, la citación es un acto solemne que posibilita se constituya la relación jurídico procesal y se de vigencia efectiva a principios como los de publicidad procesal, contradicción y derecho a la defensa, así se constituye uno de los actos de mayor trascendencia procesal pues permite al demandado conocer sobre las pretensiones del actor y ejercitar la defensa proponiendo excepciones, dándole vida a uno de los principios universales del derecho como es el debido proceso.





Es de tan importancia la citación, que constituye solemnidad sustancial a todo juicio y cuya inobservancia acarrea nulidad procesal o la misma acción de nulidad de sentencia ejecutoriada.

**2.6.2 Formas de Citación:** En el año de 1979 entró en vigencia el reglamento de citaciones, por lo que se encargó a los oficiales citadores esta función.

Entre las distintas formas de citación tenemos:

- **Citación personal:** El Art. 54 del COGEP señala que: *“Se cumplirá con la entrega personal a la o el demandado o en el caso de personas jurídicas u otras que no pueden representarse por sí mismas a su representante legal en cualquier lugar, día y hora, el contenido de la demanda (...)”*. En este sentido el demandado ejercerá sus derechos constitucionales y legales, y el citador elaborará el acta respectiva de citación.
- **Citación por boletas:** Si el demandado no se lo encontrará personalmente, el Art. 55 del mismo cuerpo legal dispone: *“(...) Se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días distintos de su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia (...)”*.
- **Citación a través de los medios de comunicación:** Medio subsidiario que procede cuando es imposible determinar la individualidad o residencia, esto es, la identidad del demandado, o el lugar físico donde habita, o, cuando la demanda se dirige a herederos desconocidos. Por regla general la citación por la prensa se hará mediante tres publicaciones realizadas en tres días distintos, laborables o no y esta publicación contendrá un extracto de la demanda que se agregará después al proceso. Cuando la citación procede a través de la radio, debe ser en un medio radial de la localidad, en fechas distintas por lo menos tres veces al día en el horario de seis a veintidós horas y que contendrán el extracto de la demanda, para esto, el propietario de la radiodifusora emitirá el certificado que indicará las fechas y horas que se realizó la transmisión con copia del respectivo audio.
- **Citación mediante comisión:** Deprecatorio o exhorto; cuando el demandado no tiene su residencia en el lugar del juicio, esto según el mandato del Art. 146 del Código Orgánico de la Función Judicial: *“Cuando deban practicarse diligencias judiciales fuera del lugar de funcionamiento del tribunal o juzgado, podrán éstos*

*deprecar o comisionar a tribunales o juezas o jueces para que las practiquen (...)*”.

- **Otras formas de citación:** Tenemos la citación por oficio que se practica en consideración a la representación que ejercen ciertos funcionarios o agentes diplomáticos a través del ministerio o institución encargada de las relaciones exteriores. Existe también la citación a comunidades indígenas con la copia de la demanda a tres miembros de la comunidad que tengan la calidad de dirigentes y por carteles fijados en los lugares más populares. La citación a los organismos estatales como a sus funcionarios, se los realizará en la dependencia más próxima al lugar del proceso.

Estas son las formas legales de hacer conocer al demandado el contenido de la demanda, en el caso del proceso monitorio, lo que se le hace saber es un petitorio judicial para que en el termino de 15 días cancele o se oponga a las pretensiones del actor.

Para terminar, existe la conducta concluyente para comparecer a juicio, esto se materializa cuando el demandado conoce extrajudicialmente determinada petición o se refiere a ella en escrito, se considerará citado en la fecha de presentación del mismo.

Una vez realizada la respectiva citación, el citador tendrá la responsabilidad de sentar razón de la correspondiente acta de citación en la plataforma virtual SATJE, con los respectivos nombres completos del citado y la forma, hora y lugar de la misma.

Ahora bien, el demandado tiene 15 días hábiles para efectuar el pago y finalizar el proceso o ejercer su derecho a la legítima defensa. Si el demandado se allana o cancela lo ordenado por el juez en el auto interlocutorio, se dará fin al proceso como resultado del cumplimiento de la obligación. Si el deudor no comparece dentro del término establecido en la ley o formula excepciones infundadas, dicho auto quedará en firme y se procederá a su ejecución, esto de conformidad con el inciso tercero del Art. 358 del COGEP:

Si la o el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición, el auto interlocutorio al que se refiere el inciso primero quedará en firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y se procederá a la ejecución (...).

Con sentencia favorable en donde el juzgador declara la existencia de la obligación, está tendrá el efecto de cosa juzgada y de acuerdo a principios constitucionales como el de recurrir al fallo, solo procederá recursos horizontales como los de aclaración o ampliación

de sentencia y el recurso vertical de apelación, que se desarrollará en detalle en los capítulos siguientes de esta investigación.

## 2.7 EFECTOS INMEDIATOS DE LA OPOSICIÓN.-

La actitud del demandado frente al requerimiento de pago después de ser citado, es distinta de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso, es decir que la oposición que haga el sujeto pasivo del proceso podrá ser total o parcial a las pretensiones del actor siempre y cuando se demuestre pruebas contundentes para que sea admitida, con esto se puede indicar que los efectos generales de la oposición a la demanda son:

1. **El procedimiento especial se convierte en un proceso contencioso de audiencia única de dos fases:** Una de saneamiento, fijación de los puntos de la litis y conciliación, y la segunda, destinada a la prueba, alegatos y sentencia; porque de acuerdo a lo que se mencionó en un principio, el procedimiento monitorio es especial por este sistema mutable al momento de hacer oposición a la demanda.

En la antigua Roma, este acto procesal fue conocido como *litis contestatio* y que etimológicamente significa pleito atestiguado, designado particularmente a los procesos de naturaleza contenciosa en el que intervienen las partes con intereses contrapuestos. Por lo mencionado, la oposición tiene para el demandado la misma importancia que la demanda para el actor, quien busca la tutela a sus derechos por parte del órgano judicial, ante todo, la oposición es el acto procesal estrictamente formal con lo que el demandado ejerce su derecho a la defensa, en otras palabras, facultad de concurrir a juicio pronunciándose sobre el contenido de la demanda, contradiciendo las pretensiones del actor y proponiendo excepciones.

Con este planteamiento, el sujeto activo en su demanda ejercita el derecho a la acción y el demandado en su oposición ejerce el derecho a la defensa y a la excepción; por lo que el segundo efecto en oposición a una demanda es el siguiente.

2. **El sujeto pasivo puede deducir cualquier excepción en vía monitoria:** Esto a diferencia del procedimiento ejecutivo, en que la ley le asigna expresamente que excepciones podrían plantearse a ese trámite. A manera de ilustración, se procede a describir algunas excepciones que en la parte práctica se las desarrolla habitualmente.



- **Nulidad de lo actuado:** Este tipo de excepción afecta directamente a la ineficacia de los actos jurídicos procesales y que atañe a las garantías básicas del debido proceso. Es importante determinar que no se hace referencia a las enmiendas procesales que permiten subsanarlas en la respectiva fase de saneamiento en la audiencia única ante el juez, sino más bien a los vicios que pueda adolecer un acto procesal en cuanto a su eficacia.

En este sentido lo determina Devis Echandia (1984) *“La nulidad procesal es un vicio propio de los actos del juez, pues cuando el acto viciado proviene de las partes, se debe hablar con más propiedad, de actos ineficaces pero no de actuaciones nulas”*. (p.532) Es decir, para que no impere la nulidad de lo actuado y que un acto procesal sea eficaz, se necesita canalizar los efectos previstos en la norma adjetiva. Ejemplo. La prueba debidamente anunciada, con indicación precisa y solicitud expresa para la práctica pertinente, como la nómina de testigos con directriz de los hechos sobre los que declararán.

- **Falta de derecho del actor para proponer la acción planteada:** La doctrina lo define como ilegitimidad de personería activa, en esta virtud, la falta de derecho del actor es procedente cuando existe carencia de poder en el sujeto activo. Respecto a esta falta de poder, el actor que comparece a juicio debe reunir dos requisitos esenciales, capacidad de ejercicio y legitimación procesal.
  - o En cuanto al primer requisito, consiste en la facultad que debe tener el actor al momento de accionar ante el órgano judicial, por ejemplo tener mayoría de edad si es persona natural o representación legal cuando hablamos de las personas jurídicas. Ante esto, carecen de capacidad de ejercicio los menores de edad, personas jurídicas, dementes y aquellas con discapacidad auditiva y de habla, esto como regla general, ya que si se presentan a juicio sin prever estos particulares, la capacidad procesal sería nula por ser un presupuesto indispensable para la validez del proceso.
  - o Por otro lado, la legitimación procesal se vuelve indispensable para el sujeto que interviene en juicio representando a otra. En definitiva, se habla de un vínculo legal entre la persona que actúa físicamente en el proceso realizando actos procesales y la persona titular a quien se le atribuyen los efectos jurídicos del proceso, así la máxima jurídica *absentis alicujons presens imago*

- se tiene presente la imagen de la persona ausente, permitiendo el acto de representación en las causas jurídicas. Con este antecedente se puede partir diciendo que, la representación debe reunir los requisitos legales necesarios como elemento de formalidad para la seguridad jurídica del proceso, por eso el nombre propio “legitimación de personería”.

Es importante mencionar que la representación puede nacer de la ley, de la voluntad de las partes o por disposición judicial, por esa razón y de manera didáctica, ponemos como ejemplo a la procuración judicial, y que de acuerdo al Art. 49 de la Ley de Federación de Abogados solo se podrá conceder procuración judicial a quien tenga licencia profesional en el derecho.

- **Inejecutabilidad del documento y de las obligaciones dinerarias:** Se entiende por inejecutable aquella acción que es imposible de realizar por no reunir los requisitos legales para demandar en vía monitoria. Por ejemplo, la deuda que se pretende reclamar haya prescrito, es decir, que se haya extinguido el derecho de crédito en cuanto a su eficacia procesal por haber transcurrido el tiempo determinado en la ley.

Con este preámbulo, se puede llegar al análisis de que el proceso monitorio al encontrarse dentro de los procedimientos ejecutivos en el título II del Código Orgánico General de Procesos, nos obliga remitirnos a ley sustantiva para determinar el alcance de los plazos generales para la aplicación del derecho de crédito. En definitiva el Art. 2415 del C. Civil estatuye lo siguiente: *“Este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias”*.

En ese sentido, habrá lugar a la vía monitoria dentro de los cinco años que dura la acción con este nombre para reclamar todos los créditos a favor del acreedor, esto es de vital importancia, ya que haciendo una comparación exhaustiva con ciertos títulos valores regulados en el Código de Comercio como la letra de cambio, que al ser un título ejecutivo y que se desarrolla en proceso ejecutivo valga la redundancia, la ley especial le otorga en cambio solo tres años para demandar y no cinco como lo manifiesta la regla general.

También se debe tener en cuenta que realizada la respectiva citación al demandado, esta interrumpe la prescripción; así lo determina el inciso segundo del Art. 358 del COGEP: *“La citación con el petitorio y el mandamiento de pago de la o del*

*juzgador interrumpe la prescripción*” lo que supone la verificación de las causas que impiden plantear esta excepción, de tal forma se pierden los términos de prescripción y se volverá a contar una vez subsumida la causa que motivo la interrupción.

- **Falsedad del documento.-** El sentido natural y obvio de la palabra falsedad y de acuerdo al diccionario jurídico de Cabanellas (2011), se define como: *“Falta de verdad, legalidad, o autenticidad”*. (p.161)

Esto nos permite encontrar el camino y precisar con criterio jurídico el alcance de esta excepción, por eso debemos determinar que la falsedad puede ser material e ideológica.

- Falsedad ideológica, hace alusión al contenido y no al documento, es decir contiene información falsa, por eso se dice que el documento que contenga datos no verídicos es ideológicamente falso. La falsedad ideológica se exhibe cuando al escrito original se le insertan declaraciones contrarias a la verdad, por ejemplo, la libreta de cuentas que presenta el acreedor como prueba en el proceso monitorio, si bien el documento es auténtico en su forma y origen más no en su contenido, pues presenta afirmaciones falsas sobre la existencia real de los valores adeudados.
- En cuanto a la falsedad material, Cabanellas (2011) lo define como: *“Inmutación de la verdad, que recae materialmente sobre la escritura, y que es por ello susceptible de comprobación mediante la pericia correspondiente”*. (p.161) Lo que significa que falsedad material es la creación de un documento adulterado, cuyo objetivo es beneficiarse de la informalidad de los documentos que se presentan como prueba al proceso monitorio, por eso se debe tener la precaución procesal suficiente pues atentaría a la seguridad jurídica del mismo. Por eso recomiendo solicitar un informe pericial calígrafo y determinar la autenticidad de los documentos privados que pretendan demostrar los hechos facticos de la contienda legal.
- **La obligación no es exigible.-** Cuando hablamos del derecho civil de obligaciones, se viene enseguida la idea de prestación que debe el deudor a favor del acreedor, así lo exponía el Dr. Jorge Baraona (1997) citando al profesor Sancho Rebullida explica: *“La obligación precisamente se caracterizaba por ser el deber jurídico de un sujeto de realizar una prestación a favor de otro que ostenta el poder de exigírsela”*. (p.504)



Por esta razón, el elemento de exigibilidad encauza cuando se halla sujeta a un término que interrumpa su cumplimiento, es decir, permite a los sujetos procesales exigir el cumplimiento de pago o cancelar incluso contra la voluntad del acreedor.

3. Como tercer efecto a analizar, *no se permite reforma a la demanda ni reconvención* en el proceso monitorio.

En primer lugar por imperativo legal, pues así lo manifiesta el Art. 359, inciso final del COGEP: “*En este proceso no procede la reforma a la demanda, ni la reconvención*”. Como sabemos, la instauración del proceso monitorio en el país no viene solo motivado por una razón eminentemente jurídica, sino también práctica, es decir, reglar y proteger de manera justa y eficaz el derecho de crédito que en la actualidad se pernotan constantes abusos, dilataciones y enriquecimientos injustos por ciertos sectores; por razón social el legislador instituyó este proceso a nuestro ordenamiento jurídico para que se desarrolle de manera rápida y oportuna de acuerdo a los principios constitucionales como los de celeridad, eficacia y economía procesal.

A criterio personal, esta sería la justificación del legislativo para no permitir una reforma a la demanda y reconvención, ya que el antecedente inmediato es no volver al viejo sistema escrito procesal, que con la complicidad y fogosidad del abogado se creaban mil y un maneras de retrasar el procedimiento judicial, causando la extenuación de recursos tanto económicos como personales.

## **2.8 LOS INTERESES A COBRAR EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO.-**

Cuando estamos hablando de obligaciones de carácter dinerario, exclusivamente se encuentra adherido el tema “intereses”. En primer término y de acuerdo a varias definiciones, el interés o rédito, sería aquel importe que se paga por el uso del dinero o aquellos lucros producidos por el capital.

Cuando el deudor se encuentra en mora, hemos dicho que es el inicio para presentar una acción en vía monitoria, así el auto interlocutorio que emite la Autoridad Judicial va envuelta el petitorio de pago más los intereses que han sido ocasionados por el incumplimiento en la obligación dineraria.

Con este preámbulo es importante recurrir al precepto jurídico del Código de Comercio, que si bien estamos analizando un asunto meramente procesal, es importante examinar el





fondo de las obligaciones dinerarias que tienen su punto de partida en los diferentes actos de comercio, así el Art. 553 del C. Comercio estatuye lo siguiente: *“El préstamo se tiene por mercantil cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio, aunque las partes no sean comerciantes”*. En este sentido, vinculamos la citada norma legal y la ajustamos con la norma adjetiva que regula el proceso monitorio; llegando a la conclusión que se enfoca generalmente a los distintos actos de comercio desarrollados en nuestro diario vivir.

En este sentido y con un claro paradigma, recurrimos ahora a la definición del contrato de préstamo y que el Art. 2099 del C. Civil lo define así: *“Mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y cantidad”*. Y el Art. 2100 del mismo cuerpo legal: *“No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición trasfiere el dominio”* Es decir, se engloba directamente en los contratos de naturaleza dineraria que se analiza en este proyecto monográfico.

Ahora bien, si estamos hablando de los contratos de préstamos sobre cosas fungibles, hace referencia a la posibilidad de sustitución de un objeto por otro. Etimológicamente fungibilidad proviene de fungere, que quiere decir exactamente sustituible; de allí que fungir sea sinónimo de tomar el lugar de otro. Cuando las personas contraen obligaciones, las tienen que cumplir en la forma como se ha convenido, consecuentemente, cuando la obligación es de entregar alguna cosa, se debe entregar el objeto que se ha comprometido. Se puede decir que los bienes fungibles son aquellos bienes que pueden ser sustituidos en el cumplimiento de la obligación y que generalmente los que se producen en serie como el dinero.

Con esta breve introducción, volvemos al tema de los intereses y que el Art. 2108 del C. Civil prescribe lo siguiente: *“Se puede estipular intereses en dinero o cosas fungibles”*; es decir, el precepto jurídico ampara o respalda a favor del acreedor, solicitar los intereses legales cuando se ha iniciado un proceso monitorio. De acuerdo a la procedencia en doctrina sobre los intereses, estos pueden ser legales o convencionales.

**2.8.1 Interés legal:** Son aquellos intereses impuestos por la ley, cuya fijación está a cargo del juez sustanciador del proceso. Así lo estatuye los incisos uno y dos del





Art. 2110, C. Civil. *“Si se estipulan en general intereses, sin determinar la cuota, se entenderán los intereses legales”.*

*“Interés legal es el que determine el organismo competente del Estado”.*

De la norma citada, se establece concordancia con el Art. 557 del C. Comercio que manifiesta: *“El préstamo mercantil devenga intereses, salvo convención en contrario”.* En definitiva, si no se han estipulados expresamente los intereses en una obligación dineraria, esta se sujetara a los intereses legales, y, el juez del proceso a través de una operación lógica jurídica determinará los intereses justos a cobrar a favor del acreedor.

Para el mes de julio del 2017, el interés legal a cobrar de acuerdo a los índices del Banco Central del Ecuador, alcanza el 8.40%, con la debida precaución a los lectores que esta información tendrá vigencia trimestral.

**2.8.2 Interés convencional:** También denominado interés contractual, es el modelo establecido por las partes al momento de celebrar el contrato de crédito, es decir, el que estipula el acreedor y deudor al momento de celebrar el acto o negocio jurídico a realizar bajo el principio de autonomía de la voluntad.

Esto se da habitualmente cuando las partes precautelan que existirá un retardo en el cumplimiento de la obligación dineraria por parte del deudor. Así lo determina el Art. 2109 del C. Civil. *“El interés convencional, civil o mercantil, no podrá exceder de los tipos máximos que se fijaren de acuerdo con la ley (...)”* es decir, existe un límite permitido para estipular intereses entre particulares, ya que si el acreedor excediere los intereses autorizados, la ley presumirá la existencia del delito de usura y las consecuencias serían no solo civiles sino también penales. Además y en armonía a la norma citada, el Art. 559 del C. Comercio dispone lo siguiente en cuanto los réditos contractuales: *“En los casos en que por disposición legal está obligado el deudor a pagar al acreedor réditos de los valores que tiene en su poder, el tipo de estos réditos será el máximo permitido para el interés convencional”.*

En este orden de ideas y con la clasificación que la doctrina nos proporciona, vinculamos directamente los intereses reglamentados para el procedimiento monitorio, en el Art. 360 del COGEP: *“Desde que se cite el reclamo, la deuda devengara el máximo intereses convencional y de mora legalmente permitido”.*

En este sentido y con el análisis previo, resulta fácil entender el interés convencional, es decir, el precepto jurídico deja saber que desde que se cita al demandado con el auto interlocutorio de pago, el acreedor percibirá el interés máximo legal que se encuentre vigente si no se lo estipulo con antelación, empero, la misma regla le atribuye otro interés, estamos hablando del interés por mora o como la doctrina lo denomina *moratorio*.

Los intereses moratorios, son aquellos que se cancelan para indemnizar al acreedor los perjuicios ocasionados al tolerar el incumplimiento de la obligación por el tiempo que se estipuló al conceder el crédito dinerario. De esta forma lo define Cabanellas (2011): *"El exigido o impuesto como pena de la morosidad o tardanza del deudor en la satisfacción de la deuda"*. (p.203) Esto significa que la persona que se encuentre en mora, está en la obligación de resarcir material y moralmente a consecuencia del quebrantamiento de la obligación.

Para concluir este tema de intereses en el proceso monitorio, es indispensable tener en cuenta los modelos de réditos al momento de solicitar el pago en una demanda monitoria, por lo mencionado, la ley faculta exigir el máximo del interés legal o convencional y el respectivo rédito moratorio por los daños ocasionados al momento de violar los plazos determinados en contratos que tengan que ver con obligaciones dinerarias.

## **2.9 LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO.-**

Como ya se lo había anunciado, el proceso monitorio es aquel proceso especial por el cual el acreedor titular de una suma de dinero constante en un documento no ejecutivo, hace conocer a su deudor que dicha obligación es determinada, liquida, exigible y de plazo vencido, con la única finalidad que opere su pago.

Con esta introducción elemental se desarrollará el tema de la prueba en el proceso monitorio, que si bien es de trascendental importancia el documento informal que se adjunta a la demanda como prueba principal, como estudiantes o futuros profesionales del derecho, es importante desglosar los diferentes mecanismos legales para acreditar o arremeter las pruebas en la audiencia única de juzgamiento y que será motivación para lograr un éxito en el proceso.

El vocablo prueba deriva de las raíces latinas *probo* y *probandum*, que significan aprobar o hacer fe, en su conjunto y como acepción general, se entiende a la prueba como



aquella confirmación de los hechos alegados en juicio. A su vez Eduardo Couture (1997) define a la prueba: *“Un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio”*. (p.217) Por otro lado, Claus Roxin (2000) conceptualiza a la prueba como: *“El medio u objeto que proporciona al juez el convencimiento de la existencia de un hecho”*. (p.82)

A criterio personal, considero que la prueba es aquel mecanismo legal que proporcionan las partes procesales en la fase respectiva al juez y avalan así las pretensiones anunciadas en la demanda o en la oposición. La importancia de la prueba en este trabajo monográfico es de trascendencia, ya lo decía Devis Echandía (1970): *“Para el estudioso del derecho y particularmente para el abogado o el juez, la prueba viene a ser el complemento indispensable de todos sus conocimientos, pues sin ella no podrá ejercer su profesión ni administrar justicia”*. (p.13)

La prueba judicial que es lo que amerita el análisis en este capítulo, es toda formula que permite conocer cualquier cosa o hecho, en la que se incluyen las diferentes actividades probatorias como los dictámenes periciales o la declaración de testigos, así lo concluye el mismo Echandía (1970): *“totalidad de los medios que pueden servir de conducto al conocimiento por el juez de la cuestión debatida”*. (p.21)

Por esta razón se puntualiza que las pruebas judiciales, dan luz a la investigación objeto del litigio, es decir, permiten facilidad al juez a la hora de emitir su resolución por haber llegado a la verdad. Es importante mencionar aquella máxima jurídica sobre la carga de la prueba o en latín *onus probandi*, que significa “quien afirma incumbe la prueba”, es decir, quien alega algo está obligado a probarlo, de esta forma lo determina el Art. 162 del COGEP: *“Deben probarse todos los hechos alegados por las partes, salvo los que no lo requieran”*, este principio procesal permite al juez fallar en contra de quien sustentó el hecho factico pero no pudo demostrarlo con las pruebas anunciadas.

Ahora bien, las pruebas deben ser oportunamente anunciadas o reproducidas de acuerdo a la ley, así lo establece el Art. 76 N° 4 de la Constitución de la República: *“Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”*, este sería el fundamento de derecho para desestimar las pruebas que pretenda reproducir la contraparte, y en correspondencia a este mandamiento constitucional, el Art. 160 del COGEP describe lo siguiente en cuanto

a la admisibilidad de la prueba: *“Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad (...)”*.

Las pruebas que se pretendan reproducir en la audiencia única, deben reunir ciertas condiciones y que los abogados deben tomar en consideración:

- **Sentido de pertinencia:** Esto es que tenga relación teórico práctica con lo que se está alegando en juicio o más bien, los hechos que se pretende demostrar con la prueba debe tener una relación directa con el hecho investigado, por ejemplo, una prueba impertinente sería aquella en la que se demuestra la buena conducta del deudor, cuando lo que se está demandando es un daño patrimonial.
- **Sentido de utilidad:** Que brinde el respectivo beneficio a la partes para tener ventaja en el debate y prestar un beneficio útil al convencimiento del juez, por ejemplo, presentar al juez veinte testigos para determinar si la firma corresponde o no al deudor, sería una prueba inútil ya que no aporta ningún beneficio al esclarecimiento de la verdad.
- **Sentido de conducencia:** No es más que la conducción legal conveniente para demostrar los hechos alegados, es decir la prueba legítima y eficaz cuyo resultado es llegar a la verdad, por ejemplo, acreditar una compraventa de un bien inmueble a través de un documento privado cuando lo idóneo y conducente sería a través de escritura pública.

**2.9.1 Clasificación de los medios probatorios:** En la actualidad existen distintos criterios para clasificar las pruebas judiciales, pero no vamos a entrar fijamente a la clasificación doctrinaria, sino más bien, una clasificación práctica, porque es el sentido de este trabajo de investigación y que se ajusta efectivamente al proceso monitorio.

Como se manifestó anteriormente, el objetivo de la prueba es exactamente lograr el convencimiento del juez, así lo estatuye el Art. 158 del COGEP: *“La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos”*. Desde este señalamiento, los medios de pruebas judiciales utilizadas en



el procedimiento monitorio son documentales, testimoniales, periciales y la inspección judicial.

**2.9.1.1 Pruebas documentales:** Es un medio utilizable para llegar a la verdad sobre los hechos alegados, las pruebas documentales pueden ser públicas o privadas esto de conformidad al precepto jurídico del Art. 193 del COGEP: *“Es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho”*.

Esta particularidad es importante al momento de presentar la demanda, porque de acuerdo al principio de lealtad procesal, las partes deben aparejar a la demanda u oposición la prueba documental con la que pretenden hacer valer sus derechos y así evitar sorpresas procesales sobre el desconocimiento de algún documento elemental para precautelar intereses.

- **Documento Público:** Son todos aquellos documentos otorgados o autorizados por notario o funcionario público competente, es decir, por los diferentes órganos del Estado.

Así lo prescribe el Art. 205 del COGEP: *“Es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario o incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública”*. Una de las características intrínsecas del documento público es que lleva implícito la presunción de autenticidad, es decir erige fe probatoria plena, lo que significa que presume su autenticidad y se prueba por sí mismo, en esta virtud, exhibido una vez en juicio, corresponde a quien lo objete demostrar la falta de autenticidad.

Se debe manifestar que en algunos casos el documento público constituye título ejecutivo cuando generalmente contiene una obligación ejecutiva, por ese motivo no se va a profundizar el análisis de este modelo de prueba documental ya que en el proceso monitorio se exceptúan los títulos ejecutivos.

- **Documento Privado:** Son todos aquellos documentos fruto de la relación entre particulares no derivada de funcionario público, cuyo compendio hace alusión a los diferentes negocios de derecho privado.

Cabanellas (2011) define al documento privado como: *“El redactado por las partes interesadas, con testigos o sin ellos, pero sin intervención de notario o funcionario*



*público que le dé fe o autoridad*” (p.133). Con esta acepción, se puede decir que es el redactado o elaborado por particulares y que no ha sido otorgado con las solemnidades sustanciales ante autoridad competente, ya lo decía Devis Echandía, el documento privado es el que no tiene la característica de público.

El Art. 216 del COGEP puntualiza al documento privado como: *“Es el que ha sido realizado por personas particulares, sin la intervención de funcionario público alguno, o con éstos, en asuntos que no son de su empleo”*. Como crítica frívola estudiada en clase sobre esta definición del COGEP, el legislador olvidó que un funcionario público fuera de su función, también es un particular.

A modo de ilustración, los documentos privados serían un recibo, una carta, un mensaje de texto, un ticket, incluso una fotografía, todos aquellos documentos a los que se refiere el antecedente probatorio del proceso monitorio pero con la firma, impronta o sello del aceptante, es decir, con el consentimiento expreso del deudor.

En definitiva, el documento privado por ser el resultado de la intervención de particulares no goza de la presunción de veracidad como un documento público, por lo que puede ser objetado por la parte contraria en cuanto a su autenticidad y admitido a un examen pericial ya que se puede acusar de falsedad material o ideológica como se lo explicó en los capítulos anteriores.

El documento privado tiene existencia jurídica y validez procesal, pudiendo también demostrarse su autenticidad a través de una declaración de parte o por aceptación y reconocimiento en juicio.

**2.9.1.2 Pruebas testimoniales:** La prueba testifical judicial como se denomina en doctrina, es aquella narración que emite un tercero al juzgador extraño a la disputa, con el fin de suministrar diferentes elementos de juicio acerca de la verdad o falsedad de los hechos interrogados. Ya lo decía Carnelutti, el testigo es el narrador de una experiencia, por eso se conoce que testigo proviene del vocablo *testis* cual significado es, *el que asiste*, es decir la persona natural y física que percibió a través de sus sentidos los hechos que se discuten en juicio.

Este medio de prueba es tan antiguo en el mundo, era considerado tanto en el derecho egipcio, romano y judío como la prueba principal y suficiente para solucionar conflictos,



se basaba supuestamente en lo ético y decoroso, de allí aquel adagio jurídico *los testigos son los oídos de la justicia*.

Actualmente la prueba testimonial no tiene mucha eficacia en el área civil, ya que los actos o contratos sobre los que versa el conflicto jurídico constan en los documentos públicos y privados. La decadencia de la moralidad y el abuso perverso de los profesionales se ha velado por recibir los testimonios con juramento, con prebenda pública y la correcta contradicción con repreguntas para que el juez aplicando la sana crítica y valoración dialéctica determine una apreciación lógica jurídica.

El Art. 174 del COGEP define a la prueba testimonial: *“Es la declaración que rinde una de las partes o un tercero (...). Se lleva a cabo mediante interrogatorio de quien la propone y contrainterrogatorio de la contraparte”*. Desde el punto de vista jurídico procesal, esta declaración se la desarrolla en la audiencia única de manera directa o a través de cualquier medio tecnológico con excepción de las declaraciones anticipadas (diligencia preparatoria). De esta forma se puede conceptualizar a la prueba testimonial como aquella prueba indirecta por representación de los incidentes gravados con la memoria, realizado tanto por las mismas partes procesales como terceros extraños al proceso.

De la misma manera el Art. 189 del COGEP prescribe al testigo como: *“Es toda persona que ha percibido a través de sus sentidos directa y personalmente hechos relacionados con la controversia”*. La narración del testigo tiene como antecedente la apreciación de los incidentes que se logra a través de los sentidos como el escuchar u observar directamente o a través de terceros y que luego son archivados en la memoria.

A su vez dentro de la prueba testimonial, el Código Orgánico General de Procesos trae consigo distintas clases de confesiones como son; la declaración de parte, declaración anticipada, el concerniente juramento decisorio y diferido, y la declaración de personas con discapacidad auditiva.

- **Declaración de parte:** Ahora el nuevo sistema procesal civil trae consigo una herramienta considerada eficaz por algunos juristas en nuestro medio, estamos hablando de la declaración de parte, el Art. 187 del COGEP ampara lo siguiente al respecto: *“(...) Es el testimonio acerca de los hechos*





*controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes”.*

Esta figura procesal era conocida en el antiguo Código de Procediendo Civil como confesión judicial, que en esencia viene a ser lo mismo, es decir, la declaración de parte es la que se hace bajo juramento sobre hechos propios y con efectos jurídicos sobre sí mismo.

- **Declaración Anticipada:** Es el testimonio que por su condición de riesgo y vulnerabilidad se recepta la testificación con antelación.

La función de ser en esta declaración corresponde a circunstancias de enfermedades graves o personas que por discapacidad física se encuentran imposibilitadas de moverse por sí mismas o personas que pretenden viajar al exterior y de todas aquellas que no puedan acudir a declarar en la audiencia. De acuerdo al Art. 181 del COGEP, todo esto es permitido cuando se garantiza el principio de contradicción a la contraparte.

- **Juramento Decisorio:** Aquel juramento donde una de las partes procesales exige a la otra que reconozca lo que manifiesta, tanto en lo beneficioso como en lo perjudicial.

Así el Art. 184 del COGEP dispone lo siguiente: *“Cualquiera de las partes puede deferir a la declaración de la otra y pedir expresamente que la o el juzgador decida la causa sobre la base de ella (...)”*, todo esto es permisible siempre y cuando el hecho sea común a las dos partes.

- **Juramento Diferido:** Juramento valido para solucionar conflictos de naturaleza dineraria.

Esta clase de juramento es considerado subsidiario cuando no existen medios de prueba suficientes para llegar a la verdad. Por regla general es en beneficio del trabajador que considere necesario acudir a la administración de justicia y no cuenten con las respectivas pruebas para reclamar la vulneración de algún derecho. El Art. 185 del COGEP al respecto describe lo siguiente: *“En las controversias sobre devolución del préstamo, cuando se alegue usura a falta de otras pruebas para justificar la tasa de interés y el monto efectivo del capital prestado se estará al juramento de la o del prestatario”.*



En resumen, el deudor que no tenga suficientes pruebas para alegar usura o el correspondiente capital real, se permitirá el juramento diferido como única prueba para su defensa, pero el juzgador no podrá motivar su sentencia valiéndose solo de esta prueba.

- **Declaración de personas con discapacidad auditiva.**- Las personas que pretendan comparecer a juicio a declarar sobre la disputa judicial y carecen del sentido auditivo, la ley les permite que lo realicen con anterioridad a la audiencia.

Para que proceda este tipo de declaración, es necesario el juramento, interrogatorio, contrainterrogatorio, así como sus respuestas serán dadas por escrito o por cualquier medio de interpretación para asegurar la tutela judicial efectiva.

La finalidad de la prueba testimonial es demostrar los hechos en disputa, por lo que el juzgador debe dirigir y aceptar aquellas preguntas claras, precisas y rechazar aquellas impertinentes, capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, hipotéticas, confusas, de acuerdo al Art. 176 del COGEP.

En este sentido, serán preguntas impertinentes las extrañas a los hechos requeridos de prueba; las preguntas capciosas las que inducen a error o apuntan a objetivos fraudulentos; las preguntas sugestivas son las que sugieren o va inmiscuida la respuesta salvo que el juez haya declarado al testigo como hostil, es decir, aquel testigo que no aporta ningún beneficio útil al esclarecimiento de los hechos y se rehúsa a testificar; también tenemos a la preguntas compuestas, aquellas que se refieren a varias circunstancias o cosas; las preguntas vagas se refieren en cambio aquellas imprecisas o ambiguas; las preguntas hipotéticas las que suponen o versan sobre hechos supuestos y no reales; y por último las preguntas confusas las que no ayudan a librar los hechos controvertidos.

Este medio de prueba una vez evacuada, corresponde al director jurídico del proceso analizarla con ponderación, con una visión lógica que le permita determinar si brinda convicción y es decisiva para el fallo. En la práctica diaria el juez realiza una valoración psicofisiológica de la conducta y respuestas del declarante, pues existen momentos en que el testigo tiene ideas fantasiosas o imaginativas que le lleva a variar o inventar los hechos que promulga dando como resultado testimonios contradictorios.

De acuerdo al tema que se está analizando en este proyecto investigativo, nos preguntamos, ¿será oportuno evacuar prueba testimonial en un proceso monitorio?



El Art. 1725 del C. Civil a esta razón prohíbe lo siguiente: *“No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito”*, es decir, al tenor del precepto jurídico citado no se procedería efectivamente con una declaración testimonial, ya que en el proceso monitorio bastaría con la presentación del documento que prueba la obligación crediticia para dar inicio una demanda en vía monitoria.

Pero como toda regla tiene su excepción, el Art. 1728 del mismo cuerpo legal admite la prueba de testigos cuando haya un principio de prueba por escrito del deudor que demuestre el hecho que está en disputa.

En correspondencia al tema de admisibilidad, es preciso citar el Art. 1727 del C. Civil: *“Al que demanda una cosa de más de ochenta dólares de los Estados Unidos de América de valor no se admitirá la prueba de testigos, aunque limite a ese valor la demanda”*, y el segundo inciso del mismo artículo del C. Civil, tampoco permite la prueba de testigos en demandas con cuantía a menos de ochenta dólares de los Estados Unidos de América, en este sentido, la ley sustantiva no permite la prueba testimonial cuando la cuantía superé tal cantidad, pero tampoco a quien pretenda limitar esa cuantía, porque el saldo pertenece a una obligación mayor, como excepción a esta regla estudiada en clase, sería admisible la prueba testimonial sólo en los casos que sea utópico acceder a las pruebas escritas sobre la obligación dineraria en circunstancias como incendios, guerras etc.

Para terminar, es importante mencionar los efectos por desacato, falso testimonio o perjurio al momento de la declaración testimonial. En caso de desacato conocida también como rebeldía del testigo, podrá ser obligado a comparecer a través de la policía nacional. Por otro lado, una vez que el testigo sea advertido de la sanciones por falso testimonio o perjurio y haya faltado a la verdad, el juzgador dispondrá que se remitan las copias a Fiscalía para la respectiva investigación penal.

**2.9.1.3 Pruebas periciales:** Como antecedente histórico se podría mencionar que la prueba pericial apareció formalmente en los llamados procesos inquisitivos (los que son impulsados de oficio por el juez) en toda Europa, pero en Francia toma fundamento legal en el periodo de las codificaciones, incorporándose primero a las leyes procesales y conducirse luego a los códigos procesales civiles y penales de Latinoamérica.



Como concepto práctico, la prueba pericial es el informe técnico científico derivada de ciertas personas que por su conocimiento especializado, verifican y obtienen elementos de valor sobre hechos que se litigan en juicio y que escapan al conocimiento o aptitudes del juez. Empero como actividad probatoria, esta se desarrolla dentro de un proceso y por mandato judicial, a solicitud de parte o de oficio por el juez.

El perito de acuerdo al Art. 221 del COGEP señala:

Es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia.

Esta labor de carácter procesal se la encomienda a una persona competente, muy distinta a las partes procesales para que realice un dictamen sobre su área de conocimiento, por lo que es denominado procesalmente hablando como un auxiliar de la administración de justicia. En fin, el perito puede realizar informes sobre bienes muebles o inmuebles, semovientes e incluso personas.

Es tan importante un informe pericial en un proceso judicial, pues como se manifestó anteriormente, al ser un auxiliar de la administración de justicia, este ayuda o asiste con sus conocimientos técnicos o especializados al juez ha esclarecer los hechos o circunstancias que para el juzgador se hacen difíciles de resolver. Por ese motivo es importante indicar que el juez es un especialista en el derecho o jurisperito, más carece de las limitaciones propias de todo ser humano, ante esto la ley faculta hacer el llamado de auxilio a expertos en ciertas disciplinas y poder comprobar y valorar el alcance de las pretensiones disputadas en juicio.

De lo mentado hasta el momento, el perito además de ser objetivo y probo en sus informes, debe reunir ciertas condiciones para que sea designado como perito judicial, es decir, primero avalar sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales en la ciencia, arte u oficio, cuya materia se ubique la pretensión de la pericia. Además debe ser mayor de edad, aunque como excepción se permita el peritaje a un adolescente cuando no existe quien realice determinada función. También debe estar debidamente acreditado en el Consejo de la Judicatura, pero si no encuentran al especialista de la rama, el juez solicitará a una universidad, colegio profesional o institución pública el envío de una terna de profesionales.



Ahora bien, de acuerdo al segundo inciso del Art. 164 del COGEP que expresa lo siguiente: *“La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica (...)”*. Es de carácter obligatorio para el juez expresar en su resolución, la valoración de todas las pruebas pertinentes para motivar su resolución. Este precepto legal, permite al juez tener la última palabra en su resolución, si acepta o no dichos informes, provocando muchas veces cuestionamientos sobre la utilidad del peritaje, ya que ocasiona una inseguridad jurídica al momento de desestimar informes técnicos valorativos. Por eso el abogado en representación de su cliente, si se siente perjudicado en los informes periciales, puede recurrir al fallo de conformidad a los diferentes recursos que la ley brinda.

En el ámbito judicial y que permiten esclarecer los hechos en procesos monitorios, tenemos a la prueba pericial, conocida en materia de criminalística como caligráfica. Esta pericia tiene por objeto esclarecer la materialidad de la falsificación o autenticidad de documentos públicos y privados que pretenden crear una obligación crediticia. Es decir, un medio de prueba útil para la defensa en un proceso monitorio, ya que se podrá descartar si la firma del aceptante es real o adulterada.

Para terminar y de acuerdo a lo establecido en el mandato Constitucional del Art. 76 N° 7, literal j, manifiesta: *“Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo”*. En definitiva y por el principio de contradicción, las partes procesales podrán contrainterrogar a los peritos o declarantes para desestimar o aprobar informes y relatos evacuados en la audiencia única.

**2.9.1.4 La inspección judicial:** A lo largo de la historia, muchos tratadistas han definido a la inspección judicial, como inspección ocular, dado que es el sentido de la vista el que predomina sobre los otros. También es conocida como acceso judicial o reconocimiento judicial, ya que acepta el empleo de todos los sentidos en el cumplimiento de la diligencia.

Para el profesor Devis Echandía (2009), la inspección judicial es:

Una diligencia procesal, practicada por un funcionario judicial, con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la observación con sus propios sentidos, de hechos ocurridos durante la diligencia o antes



pero que subsisten o de rastros o huellas de hechos pasados, y en ocasiones de su reconstrucción.

Entonces, inspección judicial sería una actividad procesal directa de naturaleza probatoria que permite la apreciación sensorial por parte del juez, de los indicios físicos vinculados a la cosa litigiosa para juzgar su estado y más circunstancias que aporten al esclarecimiento de la verdad.

Es de mucha trascendencia la inspección judicial en nuestro sistema procesal, ya que si bien permite obtener de manera directa la observación del juez y sin intermediación de terceros, faculta un análisis objetivo de los hechos en disputa. Con esta apreciación directa y objetiva, se descartan intermediarios como los testigos permitiendo superar el margen de error que retrasan o entorpecen la investigación.

Vale mencionar aquel adagio jurídico, *mientras más cerca está el juez de la prueba, más cerca está de la verdad, mientras más lejos, se aleja más*. Esto permite contradecir otras pruebas evacuadas en juicio, como cuando existe imprecisión en el informe técnico pericial o falsedad de testimonio y posibilita establecer diálogos, acuerdos y aún poner fin al conflicto.

Es fundamental dejar indicado los momentos en que procede la práctica de la inspección judicial. Primero, puede preceder a una demanda y practicarse como una diligencia preparatoria, para poder determinar la legitimación activa o pasiva de las partes en un futuro proceso. También anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera malograrse o a su vez, obtener una prueba preconstituida para hacerla valer en juicio a futuro.

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la finalidad de toda prueba es proporcionarle al juez elementos de certeza, por eso se dice que no hay nada mejor que la propia constatación del juez en el lugar de los hechos.

Este medio de prueba es muy útil en casos prácticos como linderos o cursos de aguas, porque constituye fe probatoria plena, ya que no existe mejor medio para dotarle de forma segura la convicción que necesita el juez para mejor resolver. Si bien, el tema de análisis no versa sobre temas análogos a tierras o linderos, he decidido analizar este tema porque el formulario único para el reclamo de obligaciones crediticias en vía monitoria, permite

solicitar la inspección judicial como medio de prueba para sustentar las bases de la pretensión.

## 2.10 LA RESOLUCIÓN JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO.-

Las providencias judiciales de acuerdo a la norma adjetiva, se clasifican en sentencias y autos. Entiéndase sentencia como fallo, resolución o decisión judicial, proveniente del vocablo latín *sentendo* cuyo significado jurídico es opinar o decidiendo sobre algo.

**Sentencia:** De acuerdo con el Art. 88, inciso segundo del COGEP, es: “(...) *La decisión de la o del juzgador acerca del asunto o asuntos sustanciales del proceso*”, procesalmente hablando, es el acto de concluir el debido proceso sobre las pretensiones invocadas, ya que solo ha de resolverse sobre lo litigado.

El juez como conocedor del derecho y de la argumentación jurídica, resuelve a través de este acto jurisdiccional que es la sentencia sobre los problemas de fondos en el juicio, gracias a una valoración lógica jurídica y aplicando la norma pertinente para el caso.

La sentencia es la providencia más importante y solemne dentro del proceso, pero también es un modo ordinario de terminar por antonomasia la instancia judicial. Ya lo decía Eduardo Couture (2012) al definir a la sentencia: “*Acto procesal emanado de los órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento*” o su vez el tratadista Ramírez Gronda (2012) considera que: “*La sentencia es la decisión judicial que en la instancia pone fin al pleito civil o causa criminal, resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o absolución del procesado*”.

Con sentido estricto y de acuerdo a los criterios citados, el juez indicará con exactitud los hechos constitutivos, extintivos o impeditivos de las pretensiones del actor o demandado y aplicará con certidumbre las reglas de la sana crítica, la carga de la prueba y el razonamiento jurídico para motivar una resolución objetiva.

**Auto Interlocutorio:** Así mismo el artículo 88 del COGEP, lo define como: “*La providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento*”.

En conclusión, los autos interlocutorios serían resoluciones judiciales que deciden incidentes u otras diligencias que muchas veces pueden causar daños insubsanables. La doctrina jurídica los denomina también como sentencias interlocutorias, vocablo que



proviene de las voces latinas *inter-locutio* cuyo significado es, mientras se habla o se discute, porque son decisiones intermedias que resuelven un asunto previo pronunciamiento en el transcurso del proceso.

En este sentido, dentro del proceso monitorio, el juez al momento de calificar la demanda como clara y completa dicta el respectivo auto interlocutorio, para que el demandado cumpla con la obligación o formule excepciones, así lo establece el Art. 358 del COGEP:

Si la o el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición, el auto interlocutorio al que se refiere el inciso primero quedará en firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y procederá a la ejecución (...).

Las exigencias formales para dictar el auto interlocutorio son las mismas que la sentencia en cuanto a su forma y fondo, incluyendo un pronunciamiento claro sobre el incidente que se resuelve, en este caso, el mandamiento de pago donde se presume la existencia de la obligación crediticia y la respectiva motivación en derecho con la formula Vistos, que se entiende que el juez ha revisado el incidente y se presta a resolverlo.

En doctrina existen distintas clases de sentencias, más en nuestro proyecto de investigación, limitaremos aquella sentencia que viene englobado la obligación dineraria, estamos hablando de las sentencias de condena. Este tipo de sentencia, son las que mandan a dar, hacer o no hacer algo, es decir, impone la ejecución de una prestación. Por ejemplo y de forma efectiva, como la que se manda a pagar una obligación o a su vez como la de abstenerse a ejecutar ciertos actos.

La sentencia una vez declarada, se la considerada como de inmediato cumplimiento, es decir, el sometimiento expreso del individuo a la ley, más en la práctica la desobediencia o el desacato es habitual, por esa razón la ley prevé la llamada *etapa de ejecución* en miras a garantizar la tutela judicial efectiva, cuyo mandamiento constitucional del Art. 86, numeral 3 prescribe: “(...) *Los procesos judiciales sólo finalizaran con la ejecución integral de la sentencia o resolución*”. Expresión material de la garantía tutelar a un derecho reconocido.

Para la ejecución de una sentencia de dar una suma de dinero, habrá de observarse lo que estatuye el Art. 359 del COGEP: “(...) *En la misma diligencia dictará sentencia*” es decir, la audiencia única que consta de dos fases, el juez después de haber fijado los puntos de debate, evacuado la prueba y haber escuchado el debido alegato de las partes





procesales, dictará sentencia de manera oral, empero se ordenará la liquidación y pago en el término que considera razonable, mas, de no hacerlo se dispondrá el embargo y remate de bienes, cuyo resultado servirá para cubrir la deuda.

**2.10.1 Contenido de la sentencia:** La sentencia como acto procesal que pone fin a la instancia, debe ser deducida de conformidad con los hechos que forman las pretensiones de las partes y la norma jurídica en la que se fundamenta la resolución, es decir, tener congruencia entre demanda, contestación, pruebas evacuadas y sentencia.

La resolución, al ser una tarea compleja para el juez, debe ser coherente y observar los lineamientos de la razón suficiente, empoderarse en un estudio responsable antes de dictar su resolución, ya que como representante del Estado al administrar justicia, debe ser preciso en sus razones jurídicas, constitucionales y legales para motivar la decisión.

Si bien es cierto, la sentencia que se dicta de manera oral en la audiencia única, se debe reducir a escrito en el término de diez días de acuerdo al Art. 93 del COGEP. Dentro de este periodo, la sentencia debe cumplir ciertas formalidades internas y externas.

Como requisito de forma externa, tenemos la mención del órgano judicial que la dicta, fecha y lugar de emisión, utilizarse formulas administrativas como Vistos y Administrando Justicia, llevar la firma del juez, etc.

Más en su criterio interno, la sentencia comprende tres circunstancias.

- 1. Parte descriptiva:** Abarca un compendio de lo más importante del proceso, con el señalamiento de los nombres del actor y demandado, los fundamentos de hecho, la cantidad que se demanda, las excepciones de la oposición a la demanda, los puntos en que se trabó la litis y las pruebas evacuadas.
- 2. Parte motiva:** Es el razonamiento que llega el juez explicando los fundamentos de su resolución. Por eso se proclama que toda sentencia debe ser motivada, es decir, remitirse al conjunto de razonamientos de hecho y derecho con lo que el juzgador sustenta las conclusiones de su sentencia.

La parte motiva abarca el análisis de los hechos probados y las normas legales aplicable al caso, siendo obligación del director jurídico del proceso suplir ciertos considerandos de derecho para adecuarla al caso concreto.



Bajo la premisa que no se debe bajo ningún pretexto negar o suspender la justicia, se aplicaran principios de justicia universal o jurisprudencia cuando exista oscuridad en la ley, para el caso, vale recordar que los fallos de casación por triple reiteración, constituyen un precedente jurisprudencial obligatorio.

Ante esta noción, el Art. 76 N° 7, literal 1, de la Constitución de la República, prescribe:

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, no habrá motivación si en la resolución no se anuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho (...).

En correspondencia, el Art. 89 del COGEP sobre este tema manda: *“Toda sentencia y auto serán motivados, bajo pena de nulidad (...)”*. En consecuencia, la parte motiva es fundamental para que sea válida legalmente una sentencia, pues produciría efectos de nulidad si faltare, entonces la motivación es la columna vertebral de la sentencia, pues exige una garantía de probidad y prudencia en los jueces para garantizar seguridad jurídica en torno a la actividad judicial, con ello se permite que en casos de impugnación, el tribunal de alzada verifique los fundamentos del juez inferior.

- 3. Parte resolutive:** Contiene la decisión final sobre la pugna de intereses sometida a la decisión del juez. La sentencia debe ser congruente con la prueba y las normas legales enfocadas al caso, debiendo además enunciar de manera clara a fin de que pueda ser cumplida en su totalidad y sin dilaciones. Lo importante en esta parte de la sentencia, es que se fijará el derecho que se declara o constituye, como aquello que se manda a dar, en este caso, pagar la suma de dinero o declarar sin lugar la demanda.

## 2.11 LA IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.-

La palabra impugnación proviene del latín *impugnativo*, que en su contenido significa combatir o contradecir. Así, impugnación es la contradicción o ataque procesal a las resoluciones judiciales, es decir, exigencia al órgano jurisdiccional la reparación, rescisión o revocación de sus actos que no se encuentran firmes y que son susceptibles de refutar por medio de los recursos que establece la ley.

El medio impugnatorio ha sido reconocido históricamente por todas las legislaciones a nivel mundial, con el objeto de asegurar mayor eficacia en las decisiones judiciales, a través de la subsanación en los desajustes de forma o fondo que premeditadamente incurrieron las providencias del juzgador.

Este derecho optativo a la impugnación, se ha consagrado como la forma más idónea de administrar justicia, ya que la parte procesal que se encuentre inconforme de una providencia judicial, está facultado de acudir generalmente a una instancia jerárquicamente superior y solicitar que se analice la razón del juez inferior, siempre y cuando haya sido fundamentada su objeción de manera oral en la audiencia única y no deslice a la firmeza de cosa juzgada.

Sobre la impugnación, sostiene el profesor Kielmanovich (2011): *“los actos procesales de impugnación, son aquellos que están dirigidos directa e inmediatamente a provocar la modificación o sustitución -total o parcial- de una resolución judicial, en el mismo proceso en el que ella fue dictada”*.

A su vez, Cabanellas (2011) sobre el tema de la impugnación manifiesta: *“Acto de combatir, contradecir o refutar una actuación judicial, cualquiera que sea su índole”*. (p.191)

Este derecho reconocido como principio constitucional, procede cuando existen desajustes legales o procesales, pero no siempre tenemos legitimada la vía para aplicar todos los recursos existentes en la ley, ya que los casos como el procedimiento monitorio limita el derecho a recurrir de la sentencia, esto de conformidad con el precepto rector consagrado en el Art. 359 del COGEP: *“(…) En la misma diligencia dictará sentencia, contra la cual solo caben la ampliación, aclaración y el recurso de apelación”*.

**2.11.1 Principios rectores que regulan al derecho de impugnación:** Como lo decía el tratadista Monroy Cabra (1979), *“La impugnación tiende a controlar la actuación del juez cuando sus decisiones no se ajustan a la ley”* (p.331).

Ante esta particularidad, se desglosará ciertos conceptos fundamentales que sustentan este derecho constitucional y que son apreciables y aplicables a todo recurso.

**a) Principio de doble instancia:** Ya lo manifiesta el Art. 76, N° 7, literal m de la Constitución de la República: *“Recurrir al fallo o resolución en todos los*

*procedimientos en los que se decía sobre sus derechos*”. Es decir, garantizar que un proceso sea conocido por el tribunal de alzada, con el fin de asegurar certeza y justicia mediante el control del jerárquicamente superior.

- b) Principio de legalidad:** Consagra la situación de que solo se puede emplear el uso de los recursos establecidos en las leyes ecuatorianas, por lo que queda prohibido la concesión de medios impugnatorios no reconocidos en el ordenamiento jurídico, ante esta connotación, el Art. 250 del COGEP estatuye: *“Se concederán únicamente los recursos previstos en la ley”*.
- c) Principio de interés:** Frecuentemente conexo a la parte procesal perjudicada por la actuación dudosa del juzgador, quien interesado en resarcir los daños provocados, objeta las providencias de manera oral y oportuna.
- d) Principio de temporalidad:** En razón de que los medios impugnatorios deben ser consecuente a los términos improrrogables prefijados en la ley, con el ánimo de brindar seguridad, celeridad y eficacia jurídica.
- e) Principio de limitación:** Aquí se citará dos axiomas jurídicos para el mejor entendimiento y alcance de este principio, el primero, *Tantum Devolutum Apellatum*, cuyo significado indica que el tribunal de alzada debe resolver únicamente sobre lo que se recurrió, y *Non Reformatio in Pejus*, donde se prohíbe al tribunal superior que agrave la situación del recurrente.

En la actualidad se exige la concreción de los puntos del recurso, es decir, obligar al afectado la fundamentación fáctica y legal al momento de objetar sobre lo decidido por el juez, ya no la vieja práctica de presentar un escrito con la frase memorial “Apelo” y descargar en el tribunal de alzada la misión de encontrar los errores del inferior, provocando agotamiento de recursos en tiempo y dinero.

**2.11.2 Clasificación de los medios impugnatorios:** Estos instrumentos jurídicos establecidos en nuestro sistema procesal, deben observar requisitos de fondo y forma para recurrir al fallo por parte de quien sienta vulneración a sus derechos.

En unos casos ante el mismo juez que provoco el incidente, es decir dentro de la misma instancia y en otros casos ante el jerárquicamente superior, sin olvidar lo que prescribe el COGEP en cuanto al tema impugnatorio en la situación del proceso monitorio, que posibilita solo los recursos horizontales como los de aclaración y ampliación; y el célebre recurso vertical de apelación.



**2.11.2.1 Medios de impugnación en la misma instancia:** Se los conoce doctrinariamente como recurso horizontal o remedio procesal, pretenden enmendar actos y resoluciones judiciales ante el mismo juez que los ha dictado, estamos hablando de los recursos de aclaración o ampliación.

En cuanto al trámite práctico, es propuesto por la parte perjudicada en la misma audiencia en el que se dicta el fallo, aquí el juzgador confirmará o modificará la providencia impugnada; a su vez, si corresponde a una resolución dictada fuera de la audiencia, se reducirá a escrito en el término de tres días con fundamento preciso de su impugnación y con notificación a la contraparte, todo esto de conformidad con el Art. 255 del Código Orgánico General de Procesos.

Procede el recurso de **ampliación** cuando la sentencia no resuelve todos los asuntos que debía contener, de este modo lo prescribe el Art. 253 del COGEP: *“La ampliación procederá cuando no se haya resuelto alguno de los puntos controvertidos o se haya omitido decidir sobre frutos, intereses o costas”*.

A su vez, se puede objetar y formular el recurso de **aclaración** cuando el fallo judicial no es inteligible, es decir, obscura e inentendible, así lo manifiesta el mismo 253 del COGEP: *“La aclaración tendrá lugar en caso de sentencia obscura”*.

En definitiva, estos actos impugnatorios y que la ley faculta al mismo juez sustentarlos, tiene como finalidad ahorrar recursos y evitar que deriven al conocimiento del juez de alzada, como sabemos, son meras formalidades que pueden ser reconsideradas por el mismo juez, con la cautela de que si es negada mi solicitud en los recursos horizontales, puedo interponer recurso vertical impugnatorio y apelar por la negativa.

**2.11.2.2 Medios de impugnación ante otra instancia:** La doctrina jurídica lo ha denominado como recurso vertical, porque es un medio procesal que se puede interponer dentro del mismo procedimiento pero ante un órgano superior.

Cuando se haya infringido situaciones procesales en la sentencia o en el auto interlocutorio, la parte afectada antepondrá el recurso de apelación de manera oral en la misma audiencia y se reducirá a escrito en el término de diez días con la debida fundamentación, para que sea notificada la contraparte y de contestación en el mismo término.



En el proceso monitorio solo se permite el recurso vertical de apelación, y el análisis de este proyecto se limitará solo a esta herramienta procesal, es decir, no se podrá interponer los demás medios impugnatorios que la ley dispone para los demás casos, como son el de hecho o casación.

**2.11.2.2.1 El recurso de apelación:** La etimología del vocablo apelación surge de la voz latina *apellatio* que significa reclamación, es decir, protestar contra la decisión irresoluta del juez.

Este medio impugnatorio conocido como recurso de alzada, es considerado como el más importante de los recursos ordinarios, por lo que distinguidos estudiosos del derecho como Palacios Enrique (1974) definen a este recurso como: *“Remedio procesal encaminado a lograr que un órgano judicial jerárquicamente superior con respecto al que dictó una resolución que se estima injusta, la revoque o reforme total o parcialmente”*. (p.79)

A su vez, el tratadista Hinostroza Mínguez (1999) opina:

Aquel recurso ordinario y vertical o de alzada formulado por quien se considera agraviado con una resolución judicial (auto o sentencia) que adolece de vicio o error y encaminada a lograr que el órgano jurisdiccional superior en grado al que la emitió la revise y proceda anularla o revocarla, ya sea total o parcialmente dictando otra en su lugar u ordenando al juez a quo, que expida una nueva resolución de acuerdo de los considerandos de la decisión emanada del órgano revisor. (p.105)

De lo mencionado, este recurso de alzada se encuentra encaminado a que la decisión judicial, ya sea el auto o sentencia del juez de instancia, sea analizada por un tribunal superior para que confirme, revoque o modifique dicho fallo, y de esta forma mitigar la duda razonable de las partes procesales, esto conforme al Art. 256 del COGEP que señala: *“El recurso de apelación procede contra las sentencias y los autos interlocutorios dictados, dentro de primera instancia así como contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda expresamente este recurso (...)”*.

**2.11.2.2.2 Procedimiento para recurrir al fallo:** De acuerdo a la forma procesal de impugnar ante otra instancia, se lo debe manifestar de forma oral en la respectiva audiencia según lo manda el Art. 256 del COGEP.



Una vez conocida la inconformidad de cualquiera de las partes procesales que se acogieran a este derecho, el juez admitirá si es procedente y con el debido efecto que lo concede que puede ser, sin efecto suspensivo, suspensivo o diferido.

Admitido y notificadas las partes sobre este recurso, la o las partes procesales deberán fundamentar por escrito su recurso de alzada en el término de diez días para que con notificación legal a la contraparte conteste en el mismo término. De acuerdo al Art. 258 del COGEP, tanto en la fundamentación como en la contestación, si se tratase de justificar hechos nuevos, las partes anunciaran las pruebas idóneas que serán evacuadas en la audiencia de segunda instancia o también la respectiva solicitud de anunciar las pruebas que fueron obtenidas con posterioridad a la sentencia de primera instancia.

El tribunal de segunda instancia una vez conocido el expediente, procederá a convocar a una audiencia en el término de quince días, y una vez finalizado el debate, el tribunal inmediatamente dictará su resolución.

**2.11.2.2.3 El efecto del recurso de apelación:** La norma adjetiva proclama diferentes efectos al momento de apelar un auto y sentencia, pero como se lo ha venido manifestando, limitaremos solo el efecto concerniente al proceso monitorio.

Según el Art. 262 del COGEP, establece el efecto determinante al momento de interponer el recurso de apelación en vía monitoria, amparando lo siguiente: *“Con efecto suspensivo, cuando se trate de sentencias y de autos interlocutorios que pongan fin al proceso haciendo imposible su continuación”*.

Si bien, en el proceso monitorio se interpone auto interlocutorio con el petitorio de pago para que el demandado en el término que le concede la ley pague o formule oposición, sostengo que el efecto legitimo al momento de ser concedido la apelación es el suspensivo, porque valga la redundancia, se suspende tanto la ejecución de la providencia por estar impugnada cuanto la competencia del juzgador que emitió la resolución, derivándose a la Sala Provincial, quienes serán los competente para examinar el recurso. Ante esta particularidad el Art. 261, N° 2 del COGEP establece: *“Con efecto suspensivo, es decir no se continua con la sustanciación del proceso hasta que la o el juzgador resuelva sobre la impugnación propuesta por el apelante”*.

## CAPÍTULO 3

### Legislación comparada

#### 3.1 ASPECTO GENERAL.-

El modelo del Código Procesal Civil para Iberoamérica en el año de 1988 y aceptado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, incorporó al proceso de estructura monitoria para que proceda no solo ejecutando títulos ejecutivos, sino también para ejecutar sentencias. Razón de este proceso monitorio, que en muchas legislaciones sirve para crear títulos ejecutivos o para resolver incidentes de desahucios o escrituración judicial para los contratos de compra venta, entre otros, todo dependerá de la regulación propia en cada Estado.

Por lo expuesto y como lo describió el doctrinario Correa Delcasso (1996), *“El proceso monitorio constituye, hoy por hoy, una de las mejores herramientas para descongestionar nuestras colapsadas administraciones de justicia, (p.17) por eso es necesario hacer una comparativa del proceso monitorio español que según las estadísticas, es el más exitoso a nivel mundial y el proceso monitorio colombiano, que al estar bajo circunstancias sociales muy parecidas, no deja de tener su diferencia sustancial con el ordenamiento jurídico ecuatoriano.*

A continuación, fundamento, finalidad, naturaleza y experiencia del proceso monitorio en España y Colombia, derecho comparado que permitirá realizar un análisis efímero por estos dos países iberoamericanos que tienen mucho tiempo instaurado al proceso monitorio en sus legislaciones.

#### 3.2 PROCEDIMIENTO MONITORIO EN ESPAÑA.-

El proceso monitorio español fue instaurado en España a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 1999 bajo la reforma de la ley de propiedad horizontal para el cobro de deudas comunitarias, tiene aproximadamente 18 años de vida jurídica y es considerado como uno de los procesos más utilizados en la jurisdicción ordinaria, vinculado precisamente a los asuntos civiles y mercantiles.

El fundamento del proceso monitorio español, radica básicamente en un procedimiento judicial ágil y oportuno para demandar el cobro de obligaciones de carácter dinerario, con





la premisa de igual característica que el proceso ecuatoriano, basta la comparecencia ante un juez para presumir la existencia de una deuda crediticia y la facultad opositora del demandado para que se dé la traba de la litis o pague en el término legal (veinte días).

La característica innata del procedimiento ibérico, reside en que la deuda debe constar en cualquier documento y la obligación debe ser líquida, determinada, vencida, exigible y de cualquier cuantía. Aquí consta la diferencia circunstancial con el proceso monitorio local, si bien es cierto, la deuda de carácter dinerario tiene que reunir requisitos para que sea exigible, no establece límite alguno en los montos que se pretenden cobrar, esto a diferencia del Ecuador, que pone un techo de cincuenta salarios básicos unificados para que opere el proceso monitorio.

En España, con la reforma del año 2011 a la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda persona que pretende reclamar deudas pecuniarias, lo hará sin considerar límite alguno en la cuantía, por eso y a manera de ejemplo se pueden demandar facturas o recibos impagos.

La finalidad del proceso monitorio de España, es la creación de un título ejecutivo mediante la técnica de la inversión del contradictorio o como lo describió Calamandrei (1996); *“llave indispensable para abrir las puertas de la ejecución”*, porque una vez que el deudor es notificado del pago, el acreedor podrá solicitar el cumplimiento de la obligación o a su vez el despacho de ejecución, empero, solo si el demandado establece contradicción, la ley faculta establecer un término al procedimiento monitorio para transformarlo en un proceso declarativo ordinario. Por eso se establece que la naturaleza jurídica de este proceso español, es su connotación cognitiva en su estructura procedimental al momento de hacer oposición el demandado.

Otra peculiaridad de este proceso español, es la no obligatoriedad de la asistencia profesional para iniciar un proceso en vía monitoria. No obstante, existe una excepción a esta regla, solo en caso de transformarse a un proceso declarativo al momento de existir oposición del demandado y que la deuda reclamada supere los dos mil euros, será necesaria la asistencia técnica de un abogado. Esto a diferencia del proceso monitorio ecuatoriano, en el que no es necesario la contratación profesional si la deuda no supera los tres salarios básicos del trabajador, que para este año 2017 es de mil ciento veinticinco dólares.





Para iniciar una demanda en vía monitoria, según la ley española se debe presentar la solicitud respectiva a través de los formularios que constan en las plataformas virtuales, adjuntando los documentos que prueben la deuda. Cabe resaltar un dato importante y que la jurisprudencia española lo ha regulado, de que no se admite medidas cautelares al momento de iniciar un proceso monitorio.

Una vez presentada la solicitud inicial, el secretario judicial analiza y admite a trámite bajo las respectivas consideraciones del juez competente. Continuando con el trámite, se procederá a notificar al deudor en la dirección de su domicilio familiar o laboral para que cancele la obligación o formule oposición. Si el deudor cancela voluntariamente la deuda de acuerdo a los mecanismos de cobro de la legislación española, se archivara y terminara el proceso. Si expresa oposición, deberá presentar un escrito con las debidas razones de su contradicción a la deuda, en este sentido, se termina el proceso monitorio y se inicia un proceso declarativo originario.

En España, existen dos vías para proseguir con la sustanciación del proceso declarativo. El primero en juicio verbal si la deuda no supera los seis mil euros, donde se procederá a una audiencia única, evacuando pruebas y dictando sentencia. Y segundo, continuar un proceso ordinario si la deuda asciende a los seis mil euros, donde el demandado tendrá un término de treinta días para presentar su contestación a la demanda y continuar con el habitual proceso cognitivo.

Si el acreedor tuvo éxito en el proceso de declaración y el deudor se rehúsa a pagar la deuda, tiene como opción iniciar el proceso de ejecución forzosa para el respectivo embargo, avalúo y remate de los bienes.

En definitiva, la administración de justicia española para el año 2011 ingresó un total de 811.634 procesos monitorios, por lo que el 6,2% se tramitaron en procedimiento declarativo ordinario y el 93,8% no propago actividad judicial posterior, siendo resueltos con el auto interlocutorio sin manifestar oposición.

### **3.3 PROCEDIMIENTO MONITORIO EN COLOMBIA.-**

El proceso monitorio colombiano, tiene su antecedente inmediato en la propuesta al anteproyecto del Código General de Procesos el 29 de marzo del 2011 cuya vigencia y publicación oficial se la realizó en el mismo año. Fue pretendido como una solución rápida en asuntos de mínima cuantía con la finalidad de alcanzar un título ejecutivo.



El fundamento jurídico del proceso monitorio en Colombia, es el nacimiento de una solución a las diferentes obligaciones no acreditadas en un título ejecutivo, a través de una solución rápida creando títulos de carácter ejecutivo, por lo que es considerado por juristas de Colombia como un proceso declarativo especial, es decir, facultar al juez a que declare un derecho en sentencia.

De lo mencionado se prevé que el acreedor acude a la administración de justicia y solicita al juez que se reconozca la existencia de la obligación nacida del contrato, donde lo único requerido es un principio de prueba o la simple declaración con juramento de la existencia de la obligación, esto diferencia al proceso monitorio ecuatoriano que necesariamente necesita la aceptación o cualquier mecanismo de consentimiento que pruebe la deuda.

Entre las características esenciales del proceso monitorio en Colombia tenemos que es un proceso que no admite la reconvención, al igual que en Ecuador, es una medida de seguridad jurídica, para no tentar a las diferentes formas de extinguir obligaciones como la compensación alegada en la oposición. También y al igual que las diferentes legislaciones que regulan al proceso monitorio, existe el principio doctrinario conocido como *la inversión de la carga del contradictor*, donde se obliga al demandado establecer la traba de la litis al momento de oponerse a la demanda, de la cual se deriva a un proceso verbal sumario como el proceso español, pero diferente al proceso monitorio en Ecuador.

Al momento de presentar la demanda monitoria en Colombia y establecer los requisitos de procedibilidad como el de ser una obligación dineraria, contractual, determinada y exigible, existe la posibilidad de solicitar medidas preventivas, mas no cautelares, ya que estas últimas pueden ser solicitadas después de la sentencia definitiva.

En cuanto al trámite específico en esta legislación comparada, se estatuye que la no contestación a la demanda finalizará en una sentencia condenatoria, es decir, prestará mérito de ejecutivo y efectos de cosa juzgada. Una vez que se admite la demanda en vía monitoria, se notificará al deudor a través de un auto para que cancele dicha pretensión, (conocido como auto interlocutorio en Ecuador) teniendo diez días hábiles para que pueda hacer uso del derecho a la defensa, entre las que podrá asumir las siguientes conductas:

- Aceptar la demanda y pagar lo pretendido por el actor para que finalice el proceso.



- Contestar haciendo oposición parcial o totalmente, si es fundamentada tal oposición, se derivará a un proceso verbal sumario y se notificará al sujeto activo del proceso para que anuncie las pruebas adicionales de cargo y descargo, en este debido proceso se llamará a una audiencia para litigar y sentenciar conocida como de instrucción y juzgamiento.
- Si el deudor no contesta la demanda, se allana o propone excepciones sin fundamento, el juez sentenciará con la declaratoria de existir la obligación transformándose en un título ejecutivo y con efectos de cosa juzgada, por lo que el legislador colombiano consideró no admitir recurso alguno contra esta decisión, esto a diferencia del proceso monitorio ecuatoriano que si admite recurrir al fallo.

Lo interesante dentro del proceso monitorio colombiano, es la concerniente creación de un título ejecutivo una vez declarada la obligación crediticia con el proceso monitorio, cuyo objetivo es interponer una acción ejecutiva ante el mismo juzgador, adjuntando la sentencia declarativa con el beneficio de implementar las medidas cautelares que en el proceso monitorio no se le permitió accionar.

A mi criterio, no es una facultad que pregone los principios de celeridad y economía procesal en Colombia, porque se estaría agotando recursos de tiempo y dinero al presentar primero una acción en proceso monitorio y después con la sentencia declarativa proseguir con la acción ejecutiva, contradictorio en cuanto a su naturaleza jurídica, es decir, realizar una estrategia procesal que bien puede iniciarse desde un comienzo en proceso ordinario a través del principio de prueba por escrito.

### 3.4 COMPARACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO.-

#### 3.4.1 Tabla 1

Procedimiento Ejecutivo	Procedimiento Monitorio
Se ordenan providencias preventivas	No admite providencias preventivas
Acompañar a la demanda el título ejecutivo	Adjuntar documento simple que avale la obligación
No tiene límite en la cuantía	Sirve para el cobro de hasta 50 SBU
Competencia Civil y Mercantil	Laboral, Civil, Niñez, Mercantil
Obligaciones de dar o hacer	Obligaciones solo de dar
Excepciones limitadas	Sin límite en las excepciones
Admite la reconvención y reforma a la demanda	No admite reconvención ni reforma a la demanda
Se ordena que pague el adeudo o dimita bienes con el primer auto	El auto inicial es interlocutorio y si no hay oposición se vuelve definitivo
Su apelación es efecto no suspensivo	Se apela con efecto suspensivo
Si no existe contestación del auto inicial se dicta sentencia	Si no existe oposición, el auto interlocutorio queda en firme y con efecto de cosa juzgada
15 días para oponerse	15 días para el pago u oponerse
Operan los intereses desde que esta exigible la obligación	Los intereses cuentan desde la citación
Requiere de abogado patrocinador	Si el reclamo es menor a 3 SBU no necesita abogado
Requiere de demanda escrita	Puede ser con demanda o con Formulario del Consejo de la Judicatura.

**Fuente:** Capacitación COGEP

**Autor:** Consejo de la Judicatura

## **CAPÍTULO 4**

### **Conclusiones**

La presente investigación monográfica alcanzó algunas conclusiones de carácter positivo en correspondencia a los objetivos iniciales y que a continuación se detallan.

Si bien es cierto, nuestro sistema procesal civil codificado a través del Código Orgánico General de Procesos, sufrió cambios novedosos para encontrarse a la par con la constitución del país y poder así ensalzar aquellos postulados rectores o principios procesales que en la práctica se venían vulnerando. La sustanciación de los procesos a través del sistema oral para agilizar la solución pronta y oportuna de los conflictos y que el sistema procesal civil escrito había dejado pendiente, fue la coyuntura política para que el legislador apruebe el nuevo sistema procesal y que entre las novedades sustanciales se encuentra el proceso monitorio como fórmula para solventar aquellos negocios jurídicos acreditados en documentos informales que no constituían títulos ejecutivos.

El proceso monitorio en la legislación ecuatoriana, es de naturaleza documental, porque como se ha revisado en la norma pertinente, necesita obligatoriamente adjuntar la prueba o documento que demuestre la obligación crediticia, esto a diferencia del proceso monitorio puro que es concebido en algunas legislaciones europeas, donde solo basta la simple afirmación del actor para que sea admitida a trámite.

A partir de la investigación y análisis del proceso monitorio en el Ecuador, el acreedor que pretenda cobrar una obligación por esta vía, debe prever ciertos requisitos para tener éxito en el cobro, como por ejemplo, que la obligación sea de naturaleza dineraria, líquida, exigible y de plazo vencido, esto para que sea admitida a trámite y consecuentemente los efectos inmediatos de cumplir con el auto interlocutorio que impuso el juez o la necesaria contradicción en el escrito de oposición a las pretensiones del actor, surgiendo una particularidad en el proceso, y es que no se acepta reformar la demanda ni reconvenir en el pleito, porque lo que perfila este proceso monitorio es la celeridad, intermediación y eficacia de las causas, ya no la especialidad dilatoria en los procesos, ni el constante abuso del derecho.

Desde este precepto, el proceso monitorio tiene un procedimiento especial para la conducción ágil de cobro, diferenciándose de los procesos monitorios de la región que



buscan primero la declaración de un título ejecutivo para alcanzar la ejecución forzada a través de las medidas cautelares respectivas. Nuestro proceso monitorio es singular, porque si bien buscamos una justicia pronta en estos conflictos crediticios, no se desatiende el debido proceso ni a la tutela judicial efectiva.

El proceso monitorio en el Ecuador, tuvo un análisis social por parte del legislador, al tutelar derechos crediticios de pequeños comerciantes o personas iletradas, que si bien son negocios jurídicos de ínfimas cuantías, ampara la no obligatoriedad de ser patrocinados por un profesional del derecho cuando la cuantía no supera los tres salarios básicos del trabajador en general. Pero tampoco desatiende aquellos acreedores que manejan cifras considerables en dinero, por este motivo estableció un límite para reclamar en vía monitoria, es decir, solo se pueden reclamar deudas dinerarias de hasta cincuenta salarios básicos.


Para terminar, este proceso monitorio está muy bien codificado al tenor de los principios básicos del debido proceso, mecanismo procesal que viene a descongestionar y solucionar los créditos que por mucho tiempo se vieron inmersos en engaños y abusos por parte del sujeto pasivo del proceso.



## ANEXOS

### Anexo 1.-

- Formulario para la presentación de demanda menor a tres salarios básicos.

 <b>FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE DEMANDA EN PROCESOS MONITORIOS (Menor a tres salarios básicos unificados)</b>			
<b>NOTA:</b> Si este formulario es llenado a mano, hacerlo en letra imprenta.			
<b>1. SEÑOR/A JUEZ/A DE LO CIVIL O MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN *</b>			
<b>2. INFORMACIÓN DEL ACTOR (A)</b>			
<b>Nombres y Apellidos (completos) *</b>	<b>Estado Civil *</b>	<b>Nro de cédula / pasaporte *</b>	<b>Edad *</b>
<b>Profesión u ocupación *</b>		<b>Correo electrónico *</b>	
<b>Dirección Domiciliaria *</b>			
<b>Nombre defensor público o privado designado</b>	<b>Casillero Judicial; Dirección Física y/o Electrónica</b>	<b>Correo Electrónico</b>	
<b>Dirección física o electrónica para notificaciones (en el caso en el que no se requiera patrocinio de abogado)</b>			
<b>3. No. de Registro Único de Contribuyentes (en los casos que se requiera)</b>			
<b>4. INFORMACIÓN DEL DEMANDADO (A)</b>			
<b>Nombres y Apellidos (completos) *</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Nro de cédula / pasaporte</b>	<b>Edad</b>
<b>Profesión u ocupación</b>	<b>Designación del lugar en que debe citarse *</b>	<b>Correo electrónico (si lo conoce)</b>	
<b>5. FUNDAMENTOS DE HECHO, ESPECIFICACIÓN Y ORIGEN DE LA DEUDA* (narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente clasificados y numerados.)</b>			
<b>6. CANTIDAD DE LA DEUDA*</b>			
<b>7. Documento que prueba la deuda * (detallar el número de fojas) :</b>			
<b>8. FUNDAMENTOS DE DERECHO *</b>			
Código Orgánico General de Procesos: "Art. 356.- Procedencia. La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio, cuando se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas:			
1. Mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente de dicha deudora o dicho deudor.			
2. Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos, que sean de los que comprueban la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor. Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor, para acudir al proceso deberá acompañar prueba que haga creíble la existencia de una relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.			
3. Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento educativo, u otras organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, asociaciones, u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el caso de servicios educativos.			

	4. Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario se encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien.
	5. La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente, acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la reclamación y la prueba de la relación laboral.
<b>9. ANUNCIO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECE PARA ACREDITAR LOS HECHOS</b> (Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica.)	
	<b>9.1. TESTIMONIAL:</b>
	9.1.1. Declaración de parte:
	9.1.2. Juramento Decisorio:
	9.1.3. Juramento Deferido:
	9.1.4. Declaración de Testigos (adjuntar la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán):
	<b>9.2. DOCUMENTAL:</b>
	9.2.1. Documento Público:
	9.2.2. Documento Privado:
	9.2.3. Diligencia (s) preparatoria (s):
	<b>9.3. PERICIAL:</b>
	<b>9.4. INSPECCIÓN JUDICIAL</b> (la especificación de los objetos sobre los que versarán la diligencia):
<b>10. La pretensión clara y precisa que se exige: *</b>	
<b>11. La cuantía (números y letras): *</b>	
<b>12. ESPECIFICACIÓN DEL TRÁMITE: MONITORIO</b>	
<b>13. FIRMA</b>	
Actor (a)	Defensor (a)





## BIBLIOGRAFÍA

Corporación de Estudios y Publicaciones. *Constitución de la República del Ecuador*, Quito, CEP, 2008.

Corporación de Estudios y Publicaciones. *Código Orgánico de la Función Judicial*, Quito, CEP, 2015.

Corporación de Estudios y Publicaciones. *Código Orgánico General de Procesos*, Quito, CEP, 2016.

Corporación de Estudios y Publicaciones. *Código Civil Ecuatoriano*, Quito, CEP, 2015.

Corporación de Estudios y Publicaciones. *Código de Comercio*, Quito, CEP, 2014.

Corporación de Estudios y Publicaciones. *Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos*, Quito, CEP, 2008.

Corporación de Estudios y Publicaciones. *Ley de Inquilinato*, Quito, CEP, 2013.

Alessandri, Arturo. *Tratado de las Obligaciones*. Santiago de Chile, Edit. Jurídica de Chile, 2004.

Azula, Jaime. *Manual de Derecho Procesal Civil*. Bogotá D.C, Edit. U.C.C. 2008

Cabanellas, Guillermo. *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires, Edit. Heliasta S.R.L. 2011

Carteau, Carlos. *El Proceso Monitorio*. Argentina, Edit. La Ley del Litoral. 2016.

Cornejo, José. *Procedimiento Monitorio en el COGEP*. Quito, Edit. Revista Judicial. 2016.

Correa, Juan Pablo. *El proceso monitorio en la nueva ley de enjuiciamiento civil*. España, Edit. Bosch. 1998.

Couture, Eduardo. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires, Edit. De Palma, 3ra Edic. 1997.

Cueto, José María, Sergio Ábeso y Juan C. Martínez. *La Armonización del Derecho Mercantil en África, impulsada por la OHADA*. Madrid, Edit. Ministerio de Justicia, 2011.



Echandia, Devis. *Teoría General del Proceso*. Estados Unidos, Edit. U.N., 1984.

--- Tomo 1. *Teoría General de la Prueba*. 1970.

--- Temas de Derecho. *La Inspección Judicial*. 2009. Internet:  
<https://temasdederecho.wordpress.com/tag/requisitos-de-la-inspeccion-judicial/>.  
Acceso: 12 abril 2017.

García F, José. *Procedimiento Monitorio Contemplado en el COGEP*. Ecuador, Edit. Derecho Ecuador, 2016.

Harasic, Davor. *Curso de Derecho Procesal I*. Chile. 2003.

Hinestrosa, Alberto. *Medios Impugnatorios*. Perú, Edit. Gaceta Jurídica, 1ra Edic. 1999.

Hinestrosa, Fernando. *Tratado de las Obligaciones, concepto, estructura, vicitudes*. Bogotá D.C., Edit. Cordillera S.A.C. 2007.

Illanes, Fernando. *La Acción Procesal*. Bolivia, Edit. CED. 2010.

Machuca, Kaiser. *Materia, Derecho Orgánico Procesal*. Cuenca, Facultad Jurisprudencia-Universidad de Cuenca, 2015.

Martín Jiménez, Carlos Manuel y Juan José. *Teoría y Práctica de las Acciones Civiles*. Valladolid-España, Edit. Lex Nova, 2010.

Montero, Juan. *Derecho Jurisdiccional*. España. Edit. Tirant lo Blanch, 10ma edic. 2015.

Monroy, Marco. *Principios del Derecho Procesal Civil*. Bogotá, Edit. Temis, 2da Edic. 1979.

Palacios, Enrique. *Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires, tomo 1. 1974.

Real Academia de la Lengua Española, 2017.

Roxin, Claus. *Teoría General de la Prueba*. Buenos Aires, Edit. Del puerto, Córdoba. 2000.

Santacruz M., Patricio. *La motivación*. Cotopaxi. Edit. Latacunga, 1ra edic. 2010.

Valcárcel, Felipe. *El Proceso Monitorio*. Barcelona-España. 2014



Rioja, Alexander. *Procesal Civil-La Acción*. 2010. Internet:

<http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2010/03/25/la-accion/>. Acceso: 08 enero 2017.

Colmenares, Estudios Jurídicos. *Elementos Fundamentales del Derecho Procesal*. 2010.

Internet: <http://fernandocolmenarez.globered.com/categoria.asp?idcat=21> . Acceso: 15 enero 2016.

UEES, Facultad de Derecho. *Memorias del Congreso de Derecho Procesal COGEP*.

Quito. 2015. Internet: <http://uees.me/wp-content/uploads/2016/05/MEMORIAS-CONGRESO-COGEP.pdf> . Acceso: 03 febrero 2017.

Machicado, Jorge. *Apuntes Jurídicos*. 2012. Internet:

<https://jorgemachicado.blogspot.com/2012/02/>. Acceso: 10 marzo 2017.

Castañeda, Pablo. *Audiencias y Alegatos en el COGEP*. Edit. Megalex. Ec. 2015. Internet:

<https://sites.google.com/site/megalexec/articulos---ensayos/derecho-procesal-civil/audienciasyalegatoscogep>. Acceso: 10 marzo 2017.

Glosario de Derecho Civil. *Definición de Obligación Liquida*. 2012. Internet:

<http://glosalderechocivil.blogspot.com/2012/06/obligacion-liquida.html>. Acceso: 15 abril 2017.

Baraona, Jorge. *La Exigibilidad de las Obligaciones*. Edit. Revista Chilena de Derecho,

Vol. 4. 1997. Internet: [file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-LaExigibilidadDeLasObligacionesNocionYPrincipalesP-2649923%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-LaExigibilidadDeLasObligacionesNocionYPrincipalesP-2649923%20(4).pdf). Acceso: 20 abril 2017.

Kielmonovich, J. *Teoría General de la Impugnación*. Artículos Legales. 2011. Internet:

<https://articuloslegales.wordpress.com/2011/05/29/teoria-general-de-la-impugnacion/>. Acceso: 25 mayo 2017